

Entrar en la escena política

Un análisis de las experiencias de ex guerrilleros en la política legal colombiana.

David Rampf y Diana Chavarro

IPS Artículo 2

Resumen

A finales de la década de los años 80, luego de un cambio significativo en el contexto nacional e internacional, cuatro grupos guerrilleros colombianos dejaron las armas y entraron en la política legal por medio de su participación en la Asamblea Nacional Constituyente. El hecho de que los grupos insurgentes que se encontraban en negociaciones de paz fueran autorizados por el Gobierno para formar parte en el proceso constituyente, generó la gran expectativa de que un posible giro social y político a través de medios no violentos, fuera posible. Más de dos décadas después de la desmovilización de estos grupos y a la luz del limitado éxito electoral del proyecto político colectivo ADM-19, resultado de la unión entre el M-19 y otros movimientos de la izquierda colombiana, este artículo analiza cómo se percibió la participación en la Asamblea Nacional Constituyente, el intento fallido de establecer una verdadera oposición y un cambio en la cultura política desde el punto de vista de los mismos grupos desmovilizados. El ejercicio parte de la revisión de las expectativas de algunos ex miembros del EPL, el M-19, el MAQL y el PRT, y su contraste frente a las experiencias de cada uno en la política colombiana.

Sobre la publicación

Este artículo es parte del proyecto de investigación colaborativa “Evitando recaídas en el conflicto a través de acuerdos políticos incluyentes y construcción de Estado, luego de conflictos armados internos”, lanzado en febrero de 2013 por una duración de dos años. El proyecto de investigación apunta a examinar las condiciones necesarias para acuerdos políticos incluyentes luego de conflictos armados prolongados. Un foco específico del mismo es sobre antiguos actores armados contestatarios al poder que se convirtieron en líderes de Estado. El proyecto busca igualmente informar a formuladores de política a nivel nacional e internacional sobre prácticas efectivas para mejorar la participación, representación y capacidad de respuesta en la construcción de Estado y mejora de la gobernabilidad en escenarios de pos guerra.

Esta iniciativa es llevada a cabo en cooperación con instituciones socias en Colombia (coordinación del proyecto), Alemania (coordinación de investigación), El Salvador, Sudáfrica, Sudán del Sur, Aceh/Indonesia y Nepal. Los puntos de vista expresados en este artículo son exclusivamente de los autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista y opiniones de la Berghof Foundation o CINEP/PPP. Para más información sobre el proyecto, por favor póngase en contacto con la coordinadora del área de investigación del proyecto, Dr. Véronique Dudouet en v.dudouet@berghof-foundation.org.

Sobre los autores

David Rampf trabaja como investigador para el Equipo Iniciativas de Paz del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en Bogotá, Colombia. Es coordinador del proyecto ‘Evitando recaídas en el conflicto a través de acuerdos políticos incluyentes’ y autor del estudio “Tendencias de la sociedad civil en Colombia”. Esta especializado en la participación de la sociedad civil en procesos de paz y procesos de transición de grupos insurgentes a actores de la política legal. Tiene una maestría en Ciencia Política, Antropología y Derecho Público alemán de la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia, Alemania.

Diana Chavarro es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia y Magíster en Estudios Lationamericanos de la Universidad Autónoma del Estado de México, se desempeña actualmente como asesora en el Centro de Estudios Regionales de la Federación Nacional de Departamentos de Colombia. Anteriormente colaboró con el CINEP como investigadora en el proyecto Tendencias de la Sociedad Civil en Colombia y como co-coordinadora e investigadora en el proyecto ‘Evitando recaídas en el conflicto a través de acuerdos políticos incluyentes’, realizado en alianza con la Fundación Berghof en Alemania. En su experiencia también se encuentran otras organizaciones no gubernamentales en temas relacionados con el conflicto armado y la construcción de la paz. Sus intereses de asesoría e investigación se encuentran alrededor de los temas de descentralización y autonomía territorial en Colombia y América Latina, el rol de la sociedad civil en el desarrollo y la construcción de paz y el análisis de la implementación del posconflicto en Colombia.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo del International Development Research Center en Ottawa.



Para citar el artículo: Rampf, David y Diana Chavarro 2014. Entrar en la escena política – Un análisis de las experiencias de ex guerrilleros en la política legal colombiana, *Inclusive Political Settlements Artículo 2*. Berlin: Berghof Foundation.

En internet: www.berghof-foundation.org. Este articulo está disponible en inglés.

Tabla de contenido

1	Introducción	4
2	Los grupos guerrilleros antes de la ANC	5
2.1	<i>El PCC-ML y EPL</i>	5
2.2	<i>El M-19</i>	7
2.3	<i>El PRT</i>	7
2.4	<i>El MAQL</i>	8
3	La decisión de dejar las armas y entrar en la política	9
4	Las expectativas de los antiguos grupos guerrilleros frente a la ANC y la participación política	12
5	La experiencia de los grupos desmovilizados en la política legal.....	14
5.1	<i>La experiencia de los grupos ex guerrilleros en la ANC</i>	14
5.2	<i>Experiencia de los grupos ex guerrilleros después la ANC: el caso de la ADM-19</i>	17
5	Conclusión	25
	Bibliografía	26
	Fuentes primarias	27
	Entrevistas	28

Acrónimos y abreviaturas

ADM-19	Alianza Democrática M-19
ANAPO	Alianza Nacional Popular
ANC	Asamblea Nacional Constituyente
CGSB	Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar
CRIC	Consejo Regional Indígena del Cauca
ELN	Ejército de Liberación Nacional
EPL	Ejército Popular de Liberación
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FECODE	Federación Colombiana de Educadores
M-19	Movimiento 19 de Abril
MAQL	Movimiento Armado Quintín Lame
PCC	Partido Comunista de Colombia
PCC-ML	Partido Comunista de Colombia – Marxista Leninista
PRT	Partido Revolucionario de los Trabajadores
UP	Unión Patriótica

1 Introducción

En 1996, el Estado colombiano se enfrentó de nuevo a una grave crisis. A sólo cinco años de ser firmada la Constitución de 1991 que buscó generar un cambio en la cultura política del país, el presidente Ernesto Samper encaraba acusaciones (posteriormente comprobadas) del ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña presidencial y el prolongado conflicto armado entró en una nueva fase en la cual los niveles de violencia alcanzaron una escala nunca antes vista.¹ Políticos, líderes sociales y defensores de Derechos Humanos continuaron siendo blancos de atentados para minar su actividad de incidencia. Ante este panorama, Enrique Flórez, ex integrante del *Partido Revolucionario de los Trabajadores* (PRT) y el politólogo Pedro Valenzuela plantearon una reflexión que se preguntaba si “la lección que grupos [como las FARC y el ELN] han derivado del desempeño político de la Alianza [refiriéndose a la ADM-19] es que las posibilidades reales de un movimiento alternativo al bipartidismo tradicional en la arena institucional son limitadas” (Flórez & Valenzuela 1996), y si esto, por ende, influencia negativamente sus consideraciones de cambiar la lucha armada por la competencia legal electoral tras un proceso de negociación y desmovilización.

Después de haber analizado a partir de una reflexión histórica el grado real de inclusión, tanto en el proceso de negociación de la nueva Constitución de 1991 como en su aplicación; y de haber destacado el éxito limitado del cambio de la cultura política colombiana y el impacto de la nueva oposición política que surgió en torno a la desmovilización de grupos guerrilleros (Rampf & Chavarro 2014), este artículo revisa el proceso de toma de decisiones que tuvo lugar en la *Asamblea Nacional Constituyente* (ANC) y su posterior impacto en la política colombiana, desde la perspectiva de algunos miembros de alto rango de grupos guerrilleros desmovilizados que participaron en las negociaciones de paz, en la ANC y en la arena política legal después de 1991. Por medio del contraste entre sus reflexiones actuales y las expectativas anteriores a los eventos mencionados, este trabajo busca discutir las impresiones subjetivas que se han asentado en estos actores a partir de sus experiencias en la participación política. Igualmente, busca explicar el fracaso del proyecto político *Alianza Democrática M-19* (ADM-19) desde la lectura de sus propios protagonistas.

Para lograr este objetivo el documento se divide en tres secciones: La primera, a manera de introducción, presenta el momento vivido por los cuatro grupos guerrilleros antes de la ANC; la segunda analiza las expectativas de los actores armados en relación con la ANC y su papel dentro del ámbito institucional; y la tercera compara las expectativas de estos actores con la realidad a la que se enfrentaron durante la década de 1990, razón por la cual se ha hecho un especial énfasis en el papel de los grupos guerrilleros desmovilizados durante la ANC y la experiencia puntual de la ADM-19.

Finalmente, debe aclararse que, al enfocarse en lecciones aprendidas, este escrito se basa primordialmente en entrevistas² con ex miembros de alto rango de los cuatro grupos guerrilleros que firmaron acuerdos de paz con el Gobierno Nacional entre 1989 y 1991 y que luego también fueron representados en la ANC, lo cual incluye tanto la experiencia ampliamente estudiada del *Movimiento 19 de abril* (M-19)³, así como la del *Ejército Popular de Liberación* (EPL), el *Movimiento Armado Quintín Lame* (MAQL) y el *Partido Revolucionario de los Trabajadores*.

¹ La tasa de homicidios llegó a 68 por cada 100.000 habitantes en 1996, este fue el año en que comenzó la expansión paramilitar y cuando las FARC lograron algunos de sus más grandes victorias sobre el ejército nacional (PNUD 2006; Echandía 2000).

² Todas las entrevistas citadas, con excepción de los que tienen los ex miembros de la MAQL (citado en Peñaranda de 2010 y Tattay 2005) y con Antonio Navarro Wolff (publicados en Revista Foro N.º 24), se llevaron a cabo por los autores de este trabajo entre septiembre de 2013 y febrero de 2014 en las ciudades de Bogotá (Patiño, Villa, Flórez y Villarraga), Medellín (Fajardo y Mejía), Pereira (Toro), Barranquilla (Ortiz) y Sincelejo (Restrepo).

³ Para obtener información adicional sobre los antecedentes en la historia del M-19 véase, por ejemplo, Darío Villamizar (1995). Ana Carrigan (2009) y Hernando Correa (2005) quienes ofrecen una mirada más cercana en el asedio del Palacio de Justicia en 1985. Ver también Patiño et al. (2009) para más detalles sobre el proceso de negociación y desmovilización del M-19.

2 Los grupos guerrilleros antes de la ANC

Los grupos guerrilleros que firmaron acuerdos de paz con el Gobierno colombiano entre 1989 y 1991, fueron hijos de un momento histórico particular en Colombia y en el mundo. Por un lado, la firma del pacto del Frente Nacional en 1957 marcó la intensificación de la exclusión política en Colombia y con ello invitó a la acción revolucionaria. La percepción de que los canales políticos se cerraban cada vez más y las acciones represivas por parte del Estado en contra de sectores opositores a los partidos tradicionales, dejaron este camino como el que aparentemente era el único posible (Archila 2008, 154). Por otro lado, el contexto internacional de Guerra Fría y guerra de guerrillas en América Latina dio un piso ideológico para el florecimiento de múltiples iniciativas revolucionarias armadas, que buscaron emular el camino seguido por la Revolución Cubana y la experiencia china.

Este último punto es de gran relevancia, ya que las expectativas de las personas y grupos son un reflejo de su visión del mundo, de su ideología, por lo que deben ser interpretadas y analizadas a la luz de estas ideas orientadoras. De acuerdo con Andrew Heywood (2003), una ideología consiste principalmente en una percepción del mundo, un deseo de cómo debe ser éste y la convicción sobre el camino a seguir para alcanzar esa visión. Con base en esta definición, el punto de partida elegido en este artículo, para buscar comprender el proceso que siguieron los movimientos guerrilleros en cuestión durante los últimos años de la década de 1980 y comienzos de la de 1990, fue su historia y sus posturas frente a la realidad. El análisis de sus orígenes, bases ideológicas y composición poblacional es crucial en este sentido.

2.1 EL PCC-ML y EPL

El *Partido Comunista de Colombia – Marxista Leninista* (PCC-ML) y su brazo armado, el *Ejército Popular de Liberación* (EPL), fueron producto de la escisión del *Partido Comunista de Colombia* (PCC) a comienzos de la década de 1960, que se dio debido en parte a herencias de las tensiones del comunismo a nivel internacional⁴ y en parte debido a posturas antidemocráticas al interior de la izquierda colombiana.⁵ Estos procesos llevaron a la fundación del PCC-ML en 1965 y posteriormente del EPL en 1967. Esta combinación de partido y ejército obedeció a la base ideológica maoísta que tuvo tanto el PCC-ML como el EPL durante su primera década y media de existencia.

El EPL surgió como resultado de la confluencia del interés de los líderes urbanos fundadores de esta guerrilla en conformar un ejército revolucionario y que se habían desplazado por todo el país en la búsqueda de conformar dicha empresa, con los remanentes de las llamadas “juntas patrióticas”, conformadas por antiguos dirigentes liberales que habían sido desplazados durante *La Violencia* y que lograron sobrevivir a la ola represiva que operó con fuerza durante la década de 1950 (Villarraga y Plazas 1994; Fajardo, entrevista 2013). Estos actores confluyeron en el sur de Córdoba, norte de Antioquia y Chocó y se convirtieron en los orígenes de lo que sería más adelante (durante la década de 1970 y hasta su desmovilización) una organización de carácter

⁴ Es importante recordar la ruptura entre la línea soviética y la línea maoísta a mediados de la década de 1950, cuando la URSS se declaró a favor de una convivencia pacífica con el capitalismo a nivel internacional. Esto marcó una ruptura entre maoístas y soviéticos, siendo los primeros simpatizantes de continuar con la vía armada para tomar el poder, al mismo tiempo que calificaron de ‘reformistas’ a sus contrapartes pro soviéticos. En Colombia el Partido Comunista de Colombia optó por mantener la combinación de las formas de lucha, actuando en la política nacional al tiempo que se proclamó la conformación de autodefensas para contener las acciones represivas del Estado; por su parte, la tendencia Marxista-leninista se desligó de la opción electoral y se radicalizó por la vía armada como único camino posible para lograr un cambio social y político en el país (Delgado 2008; Archila 2008; Villarraga y Plazas 1994)

⁵ Como se verá, también se dieron tensiones en las discusiones al interior del Partido Comunista Colombiano que llevaron a la expulsión de líderes como Pedro Vázquez y Carlos Arias, posteriores fundadores del PCC-ML. En la conformación de este partido confluyeron diversos sectores que habían comenzado a cuestionar los procedimientos de la izquierda en Colombia desde inicios de los años 60, como el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino – MOEC, la Juventud Comunista – JUCO, el Partido de la Revolución Socialista – PRS y unos sectores de la juventud del Movimiento Revolucionario Liberal – MRL (Villarraga y Plazas 1994, 21).

nacional al conformarse con el paso del tiempo frentes regionales⁶ en la región de la Costa Atlántica, el Magdalena Medio y el sur del país, principalmente en la región del Putumayo; así como frentes urbanos en grandes ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Barranquilla (Fajardo, entrevista 2013).

En su accionar a nivel regional, el PCC-ML y el EPL tuvieron sus principales bases en el campesinado rural y en los movimientos sindicales locales, con especial presencia en el magisterio, al interior del cual también tuvieron una influencia de gran importancia a nivel urbano y en general en la dirigencia nacional, llegando a lograr la presidencia de la *Federación Colombiana de Educadores* (FECODE). Esta apropiación del espacio del profesorado impactó igualmente a los estudiantes de secundaria que secundaron con frecuencia tanto en lo urbano como lo rural las acciones del partido y del EPL y se convirtieron en fuente de importantes cuadros políticos y militares para la organización. Las universidades, en particular las de carácter público, también contaron con una importante influencia de estas organizaciones, al igual que el movimiento sindical en general (agrícola, industrial, etc.) (Villarraga no publicado, 38).

En el plano ideológico, en sus inicios el partido y su brazo armado esgrimieron consignas maoístas, fuertemente radicales en cuanto al apoyo a la vía armada como único mecanismo válido para el cambio social y de rechazo a las alianzas temporales con la burguesía proyectadas por el PCC. Como resultado de sus primeros congresos se “aprobó un discurso contestatario, de negación de la lucha política e instrumentalización de las luchas sociales en apoyo a la lucha armada; de ruptura y destrucción del Estado y su régimen político y social; de rechazo a la “dependencia del imperialismo” (Villarraga no publicado, 34). Estos planteamientos dejaron de lado la actividad política electoral y llevaron a la concentración de las acciones en formar cuadros al interior de los movimientos estudiantiles, sindicales y campesinos que prepararan el terreno para la revolución por venir y alimentaran los avances de la lucha armada (Villarraga no publicado, 34; Villarraga y Plazas 1994, 29). Sin embargo, gracias al contexto represivo nacional y a cambios a nivel internacional, que llevaron al distanciamiento del maoísmo en la década de 1980, el partido tuvo un giro radical en el XI Congreso. El cambio giro principalmente en torno de las estrategias de acción, ya que se “reconoció como principal la lucha política, relativizó la importancia de la lucha armada, consideró la posibilidad de pasar a una fase de legalización del partido y uso de la lucha electoral y cambió la estrategia de guerra popular prolongada por la de guerra popular con perspectiva de una insurrección popular” (Villarraga no publicado, 41). Este cambio abrió la puerta para lo que posteriormente sería el diálogo con el Gobierno Nacional.

Finalmente, en cuanto a la lectura que realizaba esta organización política y militar del contexto del país y las principales demandas esgrimidas, inicialmente se concentraron en un cambio revolucionario total en el modelo político del país, pero fueron derivando en aspectos más puntuales como la apertura democrática que permitiera superar la exclusión generada por el pacto del Frente Nacional, la superación del estado de sitio como principal instrumento de Gobierno, la violación sistemática por parte del Ejército Nacional de los Derechos Humanos y la exclusión económica producto de la concentración de los recursos en unas pocas familias (Mejía, entrevista 2013; Fajardo, entrevista 2013; Villa, entrevista 2013). Como Darío Mejía (entrevista 2013), ex comandante del EPL y uno de sus delegados en la ANC, recuerda:

“Nosotros seguimos planteando la posibilidad de que haya una apertura democrática que el país necesita, espacios de participación ciudadana, ampliar la libertades democráticas, las libertades políticas, [Por] que el poder está establecido para que unas mismas familias unas mismas personas lo ejerzan, [por]que no hay posibilidades para la gente participe”.

Adicionalmente y debido a sus bases en el medio rural, una demanda relevante (y compartida por el PRT) fue la reforma agraria, consistente principalmente en la solicitud de la redistribución de los títulos de propiedad (Flórez, entrevista 2013; Mejía, entrevista 2013).

⁶ Un Frente es una subunidad militar que opera en un territorio específico. Todos los grupos guerrilleros colombianos están/estaban compuestos por varios frentes.

2.2 EL M-19

Una década después de la fundación del PCC-ML y como parte de una nueva generación de movimientos armados revolucionarios en Colombia, fue creado el M-19. Este movimiento político-militar nació de una fusión entre facciones de las *Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia* (FARC) y la *Alianza Nacional Popular* (ANAPO) y debe su nombre a la experiencia traumática del fraude electoral ocurrido en las elecciones presidenciales de 1970,⁷ lo que le llevó a presentar su decisión de tomar las armas como ‘último recurso’ ante la imposibilidad de alcanzar el poder político por la vía pacífica – electoral. En conjunto con lo anterior, la inconformidad con la concepción tradicional de la lucha armada que fue compartida (aunque con algunas variaciones) por todos los grupos guerrilleros colombianos de la primera generación fue una de sus bases. Mientras que el *Ejército de Liberación Nacional* (ELN), las FARC y el EPL, en este momento, seguían principalmente una ideología de liberación a través de la guerra rural prolongada, los fundadores del M-19 sintieron la necesidad urgente de enfocarse a nivel urbano como una reacción al cambio del contexto colombiano en la década de 1970 (Patiño et al 2009).

En respuesta al cambio del contexto colombiano, que se caracterizó principalmente por una urbanización creciente, el M-19, desde sus inicios, fue un movimiento urbano. Sus miembros procedían de una combinación entre clase media con educación universitaria y de las principales ciudades (Patiño et al. 2009). Aunque este fue ampliado más adelante,⁸ la conformación principal del movimiento se mantuvo urbana ante toda su existencia.

Al igual que el PCC-ML y EPL y más tarde también el PRT, el M-19 vio en la exclusión política fortalecida por el Frente Nacional, el uso de la violencia como principal instrumento para resolver los desacuerdos políticos y el conflicto por la tierra, las raíces del conflicto armado y social del país.⁹ Esta posición incluía, además de los señalamientos contra el diseño institucional, una revisión crítica de la cultura política en general y una acusación contra el estilo de mano dura del Gobierno basado en el uso permanente del estado de sitio. Desde el punto de vista de estos grupos guerrilleros, el Estado colombiano sufría una clara crisis de legitimidad, que se manifestó a través de la degradación del Congreso y la desconfianza pública sobre el ejército, alimentado por las experiencias de violaciones de los Derechos Humanos. A diferencia de otros grupos, sin embargo, el M-19 incluía también en sus consideraciones sobre las necesidades del país la urbanización acelerada que se venía presentando y las precarias condiciones sociales resultantes (Patiño et al. 2009).

2.3 EL PRT

Con respecto al PRT, éste surgió en 1982 de la Tendencia Marxista-Leninista-Maoísta, un sector mayoritario que había sido expulsado del PCC-ML y del EPL a mitad de los años 70. A pesar de su influencia en los sindicatos y movimientos campesinos en otras regiones del país y su participación en todas las coordinadoras guerrilleras de los años 80, el grupo tuvo un claro enfoque regional en la Costa Atlántica y conservó su carácter de actor marginal del conflicto a lo largo de su existencia. A pesar de las diferencias en cuanto a su tamaño e importancia relativa, el PRT compartió elementos de la interpretación realizada por el PCC-ML y EPL sobre los problemas del sistema político colombiano, dada su base ideológica marxista-leninista-maoísta. Las tres organizaciones consideraron la lucha de clases como una cuestión central, y se identificaron a sí mismos con el

⁷ Uno de los ejemplos más relevantes de la exclusión criticada del sistema político colombiano tuvo lugar el 19 de abril de 1970, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla, el candidato de la ANAPO para la elección presidencial, iba en contra de Misael Pastrana Borrero, el candidato del establecimiento, y perdieron la competencia en un resultado muy extraño. El M-19 decidió en su nombre sobre la base de este hecho, para recordarle al país que no era posible alcanzar el poder a través de medios democráticos.

⁸ Después de su conferencia VI en 1978, el M-19 comenzó a desarrollar, además de sus estructuras urbanas, unidades militares en diferentes zonas rurales del país.

⁹ El conflicto por la tierra se ha identificado como una de las causas fundamentales del conflicto armado colombiano. Consiste en el desplazamiento forzoso sistemático de los trabajadores de la tierra y los campesinos por los terratenientes para acumular tierras. Para obtener más información, ver, por ejemplo, Fajardo y la Alimentación y la Agricultura (2002) y Reyes Posada (2009).

proletariado, y a las elites colombianas con la burguesía. También criticaron enérgicamente el cierre del sistema político que, según su entendimiento, excluyó del acceso a la política a cualquier otro movimiento político diferente de los dos partidos tradicionales (Liberal y Conservador). En particular, la práctica de gobernar sobre la base del estado de sitio y suspender los derechos políticos básicos, fue condenada como herramienta para frenar la oposición política (Rampf et al. 2014, 5ss). Enrique Flórez (entrevista 2013), antiguo dirigente del PRT, señala en referencia a las concepciones del PRT sobre la lucha armada que: “desde los 70’s nosotros teníamos claro todo el tema de la estructura oligárquica de la presencia de una burguesía, todo el análisis clásico que se hacía de las estructuras de poder”.

2.4 EL MAQL

El cuarto y último grupo de interés para este trabajo es el MAQL. Fundado en 1984 en la región sur del Cauca y con estrechas relaciones con el *Consejo Regional Indígena del Cauca* (CRIC), este movimiento operó entre las comunidades indígenas de esa parte del país y surgió como una autodefensa frente a los diversos grupos armados que luchaban por el control del territorio y de la población.¹⁰ Los tres objetivos principales del mismo eran: ganar control sobre el monopolio de la violencia; contener la expansión de los grupos revolucionarios que operaban en la zona y proteger a las comunidades indígenas del conflicto armado; y utilizar una violencia legítima de defensa contra terratenientes locales, que amenazaban el accionar y la vida de líderes sociales indígenas (Peñaranda 2010). Marcos Avirama (en: Peñaranda 2010), ex líder del CRIC, explicó la situación en una entrevista:

“El proceso de lucha desde el principio está marcado por una fuerte represión. Represión política de los partidos tradicionales, represión política también de algunas organizaciones de izquierda que querían que se desarrollara un proceso pero bajo su orientación, bajo sus intereses de grupo, y no de un proceso de lucha democrática a partir de las comunidades indígenas. Sin embargo, la mayor represión recibida fue por parte del Estado, a través de la policía, a través de los servicios de inteligencia, a través del ejército. Los terratenientes comenzaron a organizar bandas de pájaros [grupos paramilitares]¹¹ por allá en los años 72 y 73, y lograron asesinar varios compañeros dirigentes”.

Ante esta difícil situación, la agenda política del MAQL se ocupó principalmente de la exclusión social a nivel regional, sin dejar de lado una crítica a la cerrazón política y el racismo a nivel nacional. Las comunidades indígenas y negras fueron expuestas con frecuencia a leyes y políticas que tenían como base valores racistas. Uno de los ejemplos más claros de esta situación es el hecho de que, hasta la Constitución de 1991, no eran considerados como ciudadanos con plenos derechos. Lo anterior tuvo consecuencias graves para las comunidades en términos de la falta de apoyo del Estado, lo cual se traducía en educación deficiente, desnutrición generalizada y un muy difícil acceso a los servicios de salud pública.

En este contexto de represión y discriminación, la principal demanda hecha por el MAQL fue la autonomía de las comunidades indígenas y el derecho de gobernar sus propios territorios y aplicar sus propias tradiciones en materia de justicia y economía. Como ya se mencionó, la región del Cauca estaba contaba con la presencia de casi todos los movimientos armados de índole revolucionaria que existieron durante las décadas de los años 1970 y 1980, lo que ubicó a las comunidades indígenas en medio del conflicto armado y las obligó a acatar las ideas y prácticas promovidas por los movimientos armados, mientras que, al mismo tiempo, debían defenderse del Estado y los terratenientes. Toda esta situación impidió avanzar en un proceso de organización interna, por lo que se identificó, como un asunto urgente, la necesidad de una mayor autonomía (Peñaranda 2010).

¹⁰ Es importante destacar que la mayor parte de los grupos guerrilleros operando en la década de 1980 en Colombia tenían alguna presencia en la región del Cauca en ese momento. Los más poderosos eran las FARC, el EPL y el M-19. También había grupos paramilitares financiados por los terratenientes locales para controlar las comunidades indígenas.

¹¹ Los pájaros fueron grupos paramilitares financiados por terratenientes del Partido Conservador para eliminar a los líderes liberales durante La Violencia.

Al exigir el derecho de decidir autónomamente sobre su modo de vida, el MAQL confrontó un aspecto específico de la exclusión política general y por lo tanto compartió, de esta manera, una agenda común con el M-19, el EPL y el PRT. Todos los grupos guerrilleros percibieron que la exclusión política impregnaba todas las áreas culturales y económicas, dejando a una parte importante de la ciudadanía no blanca, no conservadora o liberal y no católica por fuera de los procesos de toma de decisiones. De esta manera la exclusión benefició, en la percepción de los cuatro grupos insurgentes, sólo una pequeña élite, compuesta por unas pocas familias, tanto a nivel político, como económico (Flórez, entrevista 2013; Mejía, entrevista 2013, Ortiz, entrevista 2014).

3 La decisión de dejar las armas y entrar en la política

Dejar las armas e ingresar a la política no fue una decisión fácil para ninguno de los grupos estudiados. En general, varios elementos claves en el contexto internacional y otros de índole nacional provocaron a múltiples discusiones tanto al interior de los grupos como entre ellos y llevaron en su conjunto el EPL, el M-19, el MAQL y el PRT finalmente a la decisión de transformar de grupo insurgente en actor político legal.

En el plano internacional, la caída de la cortina de hierro afectó a casi todos los movimientos guerrilleros en América Latina, y Colombia no fue la excepción. Este evento aceleró las discusiones acerca de la pertinencia de la lucha armada así como del proyecto político del socialismo en sí y cortó el apoyo económico internacional de la guerrilla (Mujica y Thoumi 1996).

Por otro lado, a nivel nacional, una creciente escalada de la violencia durante la década de 1980 llevó a una fatiga del conflicto entre la sociedad colombiana y una deslegitimación de la lucha armada como estrategia para cambios. Mientras que por una parte los carteles del narcotráfico lograron un enorme poder y declararon la guerra al Estado colombiano, por otra parte, y con estrechos vínculos con barones de la droga y el Ejército Nacional, grupos paramilitares comenzaron a ganar poder económico, influencia política y capacidad militar, amenazando a los grupos guerrilleros, sus bases sociales y a otros actores de izquierda.¹² Esta confrontación se convirtió en asimétrica debido al dinero del narcotráfico que los grupos paramilitares habían comenzado a utilizar para financiar sus fines (actividad a la que poco a poco algunos grupos insurgentes se fueron abriendo), en combinación con el apoyo que recibieron de terratenientes regionales (López 2007).

Al mismo tiempo se abrieron una serie de alternativas a la lucha armada que paulatinamente causaron al interior de algunos grupos insurgentes un cuestionamiento de la misma como única estrategia posible para conducir a cambios reales. Al romper con la política de mano dura, en búsqueda de una solución militar, de sus predecesores, los Gobiernos encabezados por Belisario Betancur y en particular Virgilio Barco empezaron a reconocer las raíces económicas y sociales del conflicto armado y se orientaron hacia una solución política. Ambos gobernantes intentaron disminuir la exclusión, dando señales de una apertura democrática al instaurar la elección directa de los alcaldes a partir de 1986, crear el Plan Nacional de Rehabilitación, que buscaba dar respuesta a las llamadas causas estructurales del conflicto y hacer varios intentos de llevar diferentes grupos insurgentes a la mesa de negociación. La ruptura con la lógica tradicional de las estrategias represivas para lograr una victoria militar sobre los grupos guerrilleros, llevó al reconocimiento de las aspiraciones políticas de estos actores (Flórez, entrevista 2013; García 1992). En línea con estos cambios en la arena política colombiana, la posterior convocatoria de la ANC se transformó en otro catalizador importante para llevar a las negociaciones de paz que tuvieron lugar en los años siguientes.

Ante este contexto internacional y sobre todo nacional, alrededor del año 1987, el M-19 empezó una reflexión interna que le direccionó a la negociación de un acuerdo de paz con el Gobierno en 1989 y

¹² Un claro ejemplo de esto fue el llamado Muerte a Secuestradores – MAS y el exterminio contra la Unión Patriótica (García 1993, 49), ocurrido desde mediados de la década de 1980 y hasta mediados de 1990 (con algunos casos de continuación hasta entrada la década del 2000).

posteriormente a la dejación de la lucha armada, como consecuencia de la determinación interna que lograr un pacto político con el Gobierno era la única vía realista hacia la paz.¹³ En años anteriores, el M-19 había sido fuertemente golpeado tanto en lo ideológico como en lo militar luego de la tragedia del Palacio de Justicia en 1985,¹⁴ lo cual se sumó a una crisis de liderazgo que poco a poco fue subsanada por la comandancia de Carlos Pizarro.

De acuerdo con antiguos dirigentes de la organización, tres elementos fueron cruciales en este proceso. El primer tema fue la constatación de que la estrategia militar utilizada por el M-19 después de la toma del Palacio de Justicia había fracasado. La “falta de eco popular de estas acciones militares, llevó a Pizarro – y todos nosotros – a convencernos de que la acción militar había alcanzado su cima” (Patiño, entrevista 2013). El segundo tema, muy relacionado con la primera reflexión, fue el cambio del equilibrio militar y política en Colombia, lo que puso a la guerrilla en una situación de desventaja ya mencionada. La tercera cuestión fue el agotamiento interno. El ex comandante del M-19 Otty Patiño subraya que “muchas de las personas que formaron parte del movimiento estaban cansadas, y otros estaban realizando actividades que no estaban en el espectro revolucionario” (Patiño, entrevista 2013), tales como actividades de extorsión o abuso de poder.

En la búsqueda de solucionar estas falencias y limitaciones, durante la segunda mitad de la década de 1980 el movimiento decidió cambiar su estrategia militar y centrarse en una guerra contra la oligarquía nacional, que se expresó en el secuestro del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado en 1988. Como recuerda Patiño, esta fue una acción arriesgada porque “esto nos pudo haber llevado al terrorismo e incluso a la muerte de Gómez Hurtado, por suerte el país reaccionó positivamente en ese entonces” (Patiño, entrevista 2013). La alternativa era usar el secuestro como un último recurso para crear una nueva ventana de oportunidad para las negociaciones con el Gobierno Nacional, que fue exactamente lo que luego sucedió (García 1992, 53).

Sin embargo, este paso fue llevado a cabo sin tener en cuenta el proceso de discusión que se venía dando al interior de la *Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar* (CGSB) y con poca consulta con las bases. Pizarro, en tanto Comandante máximo, buscó aprovechar el momento político y tomó la decisión de guiar a sus compañeros a la paz. El M-19 realizó una negociación corta con el Gobierno Nacional que puso un especial énfasis en las garantías para la participación política nacional del movimiento una vez en la vida civil (García 1992, 94) y le llevó a la dejación de armas definitiva en marzo de 1990, siendo el primer grupo insurgente de los analizados en este estudio en dar este paso. Dado que su principal objetivo fue ingresar a la contienda política legal, el M-19 pronto conformó un partido político en conjunto con otros sectores de izquierda (la Alianza Democrática M-19) que posteriormente convocó a diversos sectores del espectro político colombiano y tuvo una acogida inmediata muy positiva por parte de la sociedad en general.

Fue justamente este relativo éxito electoral inicial que se transformó, junto con la convocatoria de la ANC que en ese entonces ya se vislumbraba en el horizonte cercano, en otro elemento fundamental para que los otros tres grupos insurgentes recibieran un impulso para dejar las armas, pese a que en sectores de las FARC y del EPL la acelerada (y sin consulta al interior de la CGSB) decisión del M-19 de negociar con el Gobierno fue mal percibida.

En el caso del EPL y del PCC-ML, en el plano interno, las discusiones acerca de una posible solución negociada comenzaron a inicios de la década de los años 80, cuando en la Segunda Conferencia Nacional del EPL se habló por primera vez de la posibilidad de dialogar con el Gobierno Nacional y se profundizó la ruptura con el maoísmo establecida en el XI Congreso del PCC-ML llevado a cabo en 1980. Este viraje tuvo importantes repercusiones en la concepción de las estrategias de lucha del movimiento, expresada por ejemplo en la

¹³ Esta postura ya se había manifestado anteriormente en el movimiento en 1980, cuando el grupo realizó la toma de la Embajada de República Dominicana, lo que llevó a los primeros diálogos con el Gobierno Nacional en 1982 y a la declaración de amnistía a presos políticos, declarada por el presidente Betancur ese mismo año.

¹⁴ En 1985, el M-19 tomó el edificio de la Corte Suprema de celebrar un “juicio político” en el que el Estado colombiano debía ser acusado y condenado por no cumplir con los acuerdos de paz de 1984 hechos con el Gobierno Nacional encabezado por Belisario Betancur. El ataque terminó como una gran tragedia para el país, dejando decenas de muertos y desaparecidos.

fundación de la Unión Democrática Revolucionaria en 1982 como partido legal representante del PCC-ML, el vincularse a los diálogos de paz con Betancur que llevó a la tregua bilateral con el EPL en 1984, el surgimiento de la propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente como único camino para lograr una verdadera paz, liderada por Óscar William Calvo,¹⁵ y el rompimiento con el maoísmo internacional para comenzar un proceso de apertura política que empezó a concebir las alianzas con otros grupos insurgentes así como los vínculos con la política y los movimientos sociales (Villarraga, no publicado, 43).

El ex miembro del PCC-ML Germán Toro (entrevista 2013) recuerda este debate interno acerca de los méritos y peligros de la propuesta de Calvo para elegir pacíficamente sobre la competencia política armada:

“En el Comité Central del partido del 85 hacia delante había dos tendencias, una tendencia que defendía a capa y espada el tema de la profundización de la guerra y otra tendencia en la que estaba yo [...] que considerábamos que profundizar la acción armada era contrario a los intereses de los sectores más desfavorecidos o a los sectores que decíamos nosotros que estábamos representando o por los cuales estábamos luchando”.

Esto evidenció la percepción de una fatiga social general frente a la guerra, compartida por algunos miembros del EPL y del partido. Al confirmar dicha percepción, Mejía (entrevista 2013) recuerda:

“Todo empieza con unas discusiones internas con respecto al papel que nosotros jugábamos con respecto a la gente, la visión que nosotros teníamos era la visión de mesías y nosotros en cierta medida nos considerábamos salvadores... y llegamos a la idea de que era necesario sentarnos a conversar con el Gobierno Nacional”.

Sin embargo, el debate se prolongó por una década más. Al interior del EPL se generaron unas fuertes resistencias a profundizar en la postura a favor de dejar las armas, situación que evidenció la fuerza del brazo armado en la toma de decisiones de la organización como un todo. Adicionalmente, el fracaso del proceso de negociación¹⁶ con el Gobierno Nacional en 1984 llevó a una profundización de la guerra (Toro, entrevista 2013, Villarraga no publicado).

Fue en la preparación del XIII Congreso Nacional del PCC-ML cuando se retomó con fuerza la discusión sobre la dejación de las armas. Allí se discutieron elementos claves de las razones para esto como la degradación de la guerra, las prácticas de descomposición que se estaban presentando al interior del propio movimiento guerrillero y la pérdida de la vigencia de la lucha armada que se expresaba tanto a nivel nacional como internacional (García 1992, 91; Villarraga no publicado, 47; Toro, entrevista 2013). Finalmente, ante el éxito político logrado por el M-19 luego de su desmovilización y la convocatoria a la ANC, el movimiento tomó la decisión de dejar las armas y se desmovilizó el 1 de marzo de 1991. Toro (entrevista 2013) recuerda: “La razón política principal fue la convicción de que lo más revolucionario que podíamos hacer en ese periodo era la lucha por la democracia y que si había una oportunidad de apertura democrática y el cese de la utilización de las armas para hacer política, la desmovilización valía la pena”.¹⁷

¹⁵ Esta propuesta fue liderada por el miembro del Comité Central del PCC-ML, Óscar William Calvo. Con su cuestionamiento abierto de la lucha armada como el camino correcto para alcanzar los objetivos políticos del grupo, Calvo desencadenó una discusión interna y estableció la trayectoria del EPL en los años posteriores (Villarraga y Plazas 1994). Sin embargo esta postura no fue completamente apropiada por el PCC-ML ni el EPL sino hasta que la ANC fue convocada como tal en 1990, producto de otros eventos históricos que serán abordados más adelante, momento en el cual la organización encontró en la posibilidad de participar en este espacio un poderoso incentivo para firmar el acuerdo de paz con el Gobierno Nacional y llevar a cabo su desmovilización (Toro, entrevista 2013, Villarraga no publicado).

¹⁶ Es de gran importancia destacar la estrategia seguida en el proceso de negociación entre la administración Betancur y las guerrillas en 1984 que llevó al establecimiento de treguas bilaterales con las FARC, el M-19 y el EPL. Tanto el Gobierno como los movimientos armados hicieron uso de este acuerdo para continuar con procesos de fortalecimiento militar. El asesinato de Óscar William Calvo y de otros líderes políticos y sociales, entre ellos los de la Unión Patriótica (partido que había sido producto de los acuerdos como tal) envió un claro mensaje de represión por parte del Gobierno, fortaleciendo la desconfianza al interior de las guerrillas. Esto fue una base importante para el recrudecimiento del conflicto que se vivió desde 1985 hasta la firma de los acuerdos en 1990.

¹⁷ Incluso las FARC vieron también en la ANC un escenario político de importancia, que fue posteriormente desestimado por los efectos del ataque al campamento de Casa verde de este grupo armado.

En el caso del PRT, los principales argumentos a favor del desarme eran, junto con los cambios resaltados al nivel nacional e internacional, la pérdida interna de la legitimidad de la lucha armada y el reconocimiento de la escasa repercusión de sus actividades sobre la sociedad. La decisión del PRT de entrar en la política se vio facilitada por el hecho de que la mayoría de sus miembros estaban activos en las campañas de resistencia civil en lugar de estar dedicados a la lucha armada (Flórez, entrevista 2013; Ortiz, entrevista 2014).

Las posturas radicales que había tenido inicialmente de no participación en política y no negociación, fueron fuertemente cuestionadas ante la coyuntura del país y en especial ante los mencionados éxitos políticos del M-19 después de su desmovilización. El PRT vio entonces la posibilidad de constituir una iniciativa en la legalidad que articulase a los sectores progresistas del país y que planteara una alternativa política diferente. Por ello, finalmente el partido clandestino firmó un acuerdo de paz con el Gobierno colombiano en Don Gabriel, corregimiento de Ovejas, Sucre en enero de 1991 (García 1992, 97; Rampf et al. 2014, 10ss).

Por su parte, y teniendo en cuenta que se trataba de un grupo de autodefensa y de una fracción de movimiento social indígena en general, el proceso de transición del MAQL tuvo un carácter diferente. La principal razón interna del MAQL para la desmovilización fue el la percepción de un impacto negativo de acción armada que tuvo en el interior de las comunidades indígenas, tales como abuso de poder, el desgarró progresivo del tejido social y la creciente autonomía que fue ganando el movimiento armado con respecto de su dirección social y política (García 1992, 100). Por lo tanto, los líderes políticos del movimiento estaban buscando una manera de dismantelar su estructura armada de autodefensa (Peñaranda 2010).

Adicionalmente, el fortalecimiento del movimiento indígena en Colombia se reunió en torno a la necesidad de poner fin al conflicto armado y el cansancio de la violencia, lo que llevó a los líderes del MAQL a considerar la entrega de armas. El Gobierno Nacional había comenzado a dejar de lado las iniciativas que provenían de sectores indígenas que estaban cerca del MAQL, a causa de su lucha armada. Esto hizo más claro el daño que la lucha armada estaba haciendo para desacreditar a los objetivos políticos de los líderes indígenas civiles. En este escenario, la ANC llegó como la oportunidad perfecta para cambiar el lugar de interlocución y permitir un espacio importante para el movimiento indígena en el proceso de toma de decisiones de la nueva constitución. Henry Caballero (en: Tattay 2005), el portavoz MAQL en las negociaciones de paz con el Gobierno Nacional, recuerda que “en este contexto, es evidente que las negociaciones de paz fueron vistas de manera positiva por la dirección indígena [...]. El interés de una negociación que incluyera a todas las comunidades indígenas era importante no sólo para los líderes de la región del Cauca sino para todo el movimiento indígena nacional”.

La suma de todo lo anterior impulsó a los movimientos a dar el paso final hacia la dejación de armas y su entrada a la política legal, o como Carlos Pizarro lo expresó, a arriesgar el ´salto al vacío.

4 Las expectativas de los antiguos grupos guerrilleros frente a la ANC y la participación política

La trayectoria vivida por los grupos insurgentes en cuestión les llevó por el camino de la negociación y la dejación de las armas. No obstante, un tema central fue cuáles fueron sus expectativas frente a esta decisión, frente a la Asamblea Nacional Constituyente como eje central en este proceso y frente al después en materia de participación política.

Después de la sentencia 138 de 1990 de la Corte Suprema que finalmente permitió la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, las expectativas de muchos sectores de la sociedad se concentraron en esta última. Para ese momento, la ANC se convirtió en el objetivo principal de los cuatro grupos guerrilleros

analizados.¹⁸ Todos los acuerdos finales de paz entre el EPL, PRT y MAQL con el Gobierno Nacional, ponen claramente de relieve la importancia fundamental de la posibilidad de participar en la ANC, una vez que abandonan las armas.

El EPL, dada su propuesta histórica de una ANC planteada por el (posteriormente asesinado) comandante Calvo, encontró en este escenario una gran afinidad. Toro (entrevista 2013) afirma que aunque ni el futuro diseño de la ANC de 1991 coincidía con la anterior propuesta de Calvo, ni la iniciativa que llevó a la decisión de celebrar la ANC emergió del EPL o PCC-ML: “[la ANC] coincidió precisamente con nuestros antecedentes y nos sentíamos muy cómodos en ese proceso”.

De acuerdo con muchos antiguos miembros del EPL y PCC-ML, la ANC fue percibida como el lugar para lograr la transformación de todos los elementos controvertidos del sistema político y de poner fin a la exclusión (Toro, entrevista 2013; Villa, entrevista 2103). Villa (entrevista 2013) ejemplifica algunos de estos elementos al decir “la necesidad de abrir el sistema político estaba clara, esa era parte de las reformas fundamentales que había que lograr en la Asamblea Constituyente, pero también generar instituciones más legítimas, la justicia, el Congreso”. Él también añade: “Nosotros queríamos una asamblea delegataria del poder del pueblo, y que tuviera capacidad para tomar decisiones sobre todos los temas”. Sobre todo el pluralismo de la ANC llenó el EPL y el PCC-ML con optimismo, como lo expresó Bernardo Gutiérrez (1991) durante una intervención en una sección plenaria:

“Creemos que de aquí no saldrá una visión unilateral de un sector sino que la resultante será la emulsión de las mejores propuestas para conseguir una sociedad más justa, más tolerante y donde, a pesar de la necesaria diversidad de proyectos estatales, no tengamos que recurrir al uso de las armas, o a la represión de los contrarios, sino que nos remitamos al terrenos de la democracia”.

En cuanto al PRT, las expectativas sobre la ANC asimismo eran altas, especialmente cuando las negociaciones bilaterales con el Gobierno llegaron al punto en que la amplia agenda del PRT, que incluía una serie de reformas estructurales, ya no sería discutida durante las negociaciones, sino que se dejaría para la discusión en la ANC.

“Al comienzo, digamos, había la expectativa de que en la mesa de negociación pudiéramos colocar una agenda que tuviera que ver con los cambios que necesitaba la sociedad en su estructura económica, en su estructura política para tener una sociedad más democrática, pero eso digamos, rápidamente, sobre todo con la convocatoria de la constituyente, eso se quedó... Nos quedamos sin agenda. Entonces, inclusive la propuesta inicial de Pardo hacia nosotros tres, hacia los tres grupos, es mire, ustedes lo que necesitan es... hagamos un acuerdo exprés, rápido, para que ustedes lleguen bien posicionados a la constituyente y en la constituyente plantean todas las cosas que tengan...” (Flórez, entrevista 2013).

Por lo tanto la ANC se convirtió en el escenario real para abordar la violencia estructural y la lucha contra la injusticia social y política, o por lo menos para sentar las bases para una democracia plural que permitiera atender los problemas por la vía legal. En una de sus primeras intervenciones, José Matías Ortiz, delegado del PRT en la ANC, compartió con sectores mayoritarios de la opinión pública el deseo de que la asamblea “resuelva o por lo menos abra la vía para lograrlo, los principales problemas” (Ortiz 1991).

Por su parte, el M-19 había pedido, como parte de su acuerdo de paz con el Gobierno Nacional, una reforma constitucional para ampliar la participación política en Colombia. La convocatoria de una ANC como tal, no formó parte de la agenda de negociación. Sin embargo, en la medida en que la reforma constitucional se hundió en el Congreso, el movimiento percibió la ANC como el escenario principal para la negociación de un nuevo acuerdo político, razón por la cual la ADM-19 concentró sus acciones y recursos en tener éxito en las elecciones para este espacio político (Patiño 2013). En cuanto a la participación política en general, las propias bases ideológicas del M-19 fueron un cimiento importante para que la ADM-19 fuera posible. Mientras que el

¹⁸ Para más información sobre la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ver Rampf & Chavarro (2014).

EPL y el PRT habían tenido que dar fuertes discusiones internas a comienzos de los años 1980 para lograr la conformación del Frente Popular y a finales de la misma década para conformar Colombia Unida, el M-19 tuvo siempre una apertura mayor al sistema democrático, frente al cual había asumido una postura de desconfianza pero no de absoluto rechazo. Igualmente, la tradición del movimiento de ocuparse de llamar la atención de la opinión pública y su carácter urbano fueron elementos de importancia a la hora de convertirse en movimiento político.

Finalmente, el MAQL también vio la ANC como una gran oportunidad para que sus demandas fueran incluidas en el nuevo acuerdo político, como se puede ver en una carta escrita por el MAQL a Monseñor Pedro Rubiano, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia en este momento, en el año 1990, en el que el grupo hizo hincapié en que la ANC “es la oportunidad para que nuestro país corrija sus errores históricos; para que el pueblo realmente se convierta en la esencia de la Nación y ello se plasme en sus instituciones. La Asamblea Constitucional ha de reconocer la variedad étnica del país y valorar el componente indígena del hombre colombiano” (MAQL 1990). Con esto en mente, se construyó una alianza con el EPL y el PRT para negociar en forma conjunta con el Gobierno Nacional y exigir la posibilidad de participar en la ANC.

En cuanto a la participación política, el MAQL había surgido como una autodefensa de un movimiento social indígena más amplio, que retomó sus banderas una vez se firmó la paz, disolviendo el ejército.

5 La experiencia de los grupos desmovilizados en la política legal

5.1 La experiencia de los grupos ex guerrilleros en la ANC

Después de haber sacado el segundo número más alto de curules y con Antonio Navarro Wolff como hábil dirigente político en sus filas, la ADM-19 reclamó desde el principio el liderazgo de las fuerzas alternativas presentes en la ANC. Tanto el EPL, que contaba con dos delegados con voz y voto, como el PRT con un representante con voz pero sin voto aceptaron este liderazgo y coordinaron en gran parte sus acciones con la bancada de la alianza, incluso a partir de la activa participación de algunos miembros del EPL y el PCC-ML en la elaboración del proyecto de constitución de la nueva fuerza política (Mejía, entrevista 2013; Patiño, entrevista 2013). Por su parte, Alfonso Peña Chepe, delegado del MAQL, si bien igualmente buscó en ocasiones el intercambio directo con el movimiento y mantuvo generalmente cierta cercanía programática a los representantes del EPL, estableció sobre todo una alianza cercana e informal con los demás representantes indígenas en la ANC (Villarraga, entrevista 2013).

Dicha dinámica colectiva entre la ADM-19 y los delegados independientes ex guerrilleros se mantuvo durante los 150 días de existencia de la ANC. En cierta forma, gracias a que Navarro, como líder de la bancada, convocó reuniones diarias en las cuales se discutieron las posiciones frente a temas importantes y se coordinaron las intervenciones y el voto del grupo,¹⁹ todos los delegados entrevistados evaluaron la atmósfera al interior de la alianza como productiva y respetuosa.

Al igual que al interior de la bancada de la ADM-19, el ambiente dentro de la ANC en general se caracterizó por un amplio respeto mutuo. Como destaca Toro (entrevista 2013), “los miembros de la asamblea teníamos

¹⁹ Sin embargo, a pesar de este intento de lograr la mayor disciplina interna posible, la ADM-19 estableció que en algunos casos los constituyentes de la organización podían votar independientemente de la posición del grupo (Villa, entrevista 2013), en la búsqueda de respetar las muy diversas corrientes que integraron el movimiento. De acuerdo con Buenahora (1995), uno de los constituyentes que más desvió su posición de su respectiva bancada con sus votos fue la María Teresa Garcés de la ADM-19.

una relación entre nosotros que estaba muy por encima de las diferencias ideológicas y políticas. [Predominaba] el espíritu de consenso, el respeto por el pluralismo, [...] la capacidad de generar el reconocimiento del otro independientemente de que el otro tuviera una postura totalmente contraria a la mía”. Esta impresión es compartida por los delegados del EPL también. Mejía (entrevista 2013) recuerda, por ejemplo:

“Yo pienso que fue importante en la ANC el que todos habláramos, dijéramos lo que pensábamos y que en ese espacio la gente entendiera que somos un país único con mucha diversidad... O sea, la diversidad que había de pensamiento, de cultura, de hacer, todos éramos muy diferentes, entonces entender eso, yo creo que ese fue un espacio valioso para la época que estábamos viviendo – una época en donde la muerte era una cuestión muy común, la tortura era una cuestión muy común, la desaparición era una cuestión muy común”.

A pesar de que en algunos temas las posiciones estaban lejos de ser consensuadas, cada constituyente estaba dispuesto a escuchar los argumentos de los demás. Si bien tal situación se presentó en cierta medida debido a la falta de una mayoría suficiente para imponer la posición de un partido o movimiento (Flórez, entrevista 2013),²⁰ también se alimentó de un profundo sentimiento compartido de hacer algo significativo y de tener en sus manos una oportunidad histórica para reformar el sistema político excluyente criticado por décadas, que unió a todas las diversas fuerzas políticas. Mejía recuerda al respecto el momento en el que Alfredo Vázquez Carrizosa, constituyente de la *Unión Patriótica* (UP), propuso la retirada colectiva de todas las fuerzas de la izquierda de la ANC. Junto a otros representantes de los demás grupos insurgentes desmovilizados, él se negó a hacerlo y argumentó que “toda la vida se había pasado peleando porque la gente necesitaba de espacios, y que ahora que lo lograron, que la constitución tuviera por lo menos espacios de participación ciudadana, [no se] iba a retirar por nada en el mundo” (Mejía, entrevista 2013).

Retrospectivamente, algunos entrevistados utilizan la imagen de una isla para describir la dinámica al interior de la ANC. Por un lado, esta metáfora se refiere al relativo aislamiento entre los constituyentes y electores, o, en el caso de los cuatro delegados de la insurgencia recién desmovilizada, de sus bases. Debido a la restricción temporal de 150 días de la ANC y a la alta carga de trabajo necesaria, la comunicación y la consulta con personas fuera de la asamblea eran casi imposibles. Flórez (entrevista 2013) incluso subraya que muchos desmovilizados del PRT se enteraron de las decisiones de su delegado, principalmente a través de los medios de comunicación.

Por otra parte, Toro (entrevista 2013) contrasta el ambiente productivo de la ANC con el sistema político colombiano cerrado y excluyente. Desde su punto de vista, la ANC era una especie de isla idealista de respeto mutuo y pluralismo en el mar agitado de la *realpolitik* colombiana de los años 80 e inicios de los 90.

“El ambiente ideal de la confrontación política es el espíritu que reinó en la asamblea constituyente. Pero finalmente, eso [...], era una islita. Por fuera de la asamblea, en cierto sentido, el poder real dejó que nos embriagáramos en ese espíritu allá en la asamblea, y ellos siguieron manejando los hilos por fuera” (Toro, entrevista 2013).

Muchas anécdotas ilustran esta naturaleza idealista de la ANC, la cual fue capaz de reunir protagonistas que anteriormente se percibían mutuamente como enemigos a muerte y en algunos casos hasta logró crear la base para reconciliaciones individuales. Muestra de ello, es, por ejemplo, la amistad basada en el respeto mutuo desarrollado entre Jaime Fajardo y Darío Mejía, ambos miembros del EPL recientemente desmovilizados, por un lado y Mariano Ospina Hernández y Álvaro Gómez Hurtado, por el otro lado, dos constituyentes cuyos familiares habían sido asesinados años atrás por el mismo grupo guerrillero, (Fajardo, entrevista 2013; Mejía, entrevista 2013). Probablemente, la mejor expresión del ambiente pragmático y constructivo general, independientemente de las diferencias políticas e ideológicas, fue la temprana alianza entre Navarro Wolff, ex

²⁰ Para ser aprobado, todos los artículos tenían que ser aceptados por la mayoría absoluta en primer debate, o una mayoría de dos tercios en el segundo debate.

comandante del M-19, y Gómez Hurtado, líder conservador y miembro de la vieja clase política que había sido secuestrado por el M-19 en 1988. Ambos líderes políticos no sólo asumieron conjuntamente la presidencia de la ANC, junto con Horacio Serpa, sino que definieron, en cierta medida, los procedimientos internos de la misma.

No obstante y más allá de la percepción positiva de haberse sentido aceptados e incluidos, algunos de los ex combatientes llegaron a la ANC con cierta sensación de inexperiencia en lo que se refiere al manejo de la política, como destaca Mejía (entrevista 2013). Esto apunta a las dificultades que algunos delegados de repente tuvieron que enfrentar durante su transformación de rebelde a protagonista de la política legal, al competir con políticos profesionales. Respecto a este punto, las entrevistas realizadas para este artículo también llaman la atención sobre una diferencia aparente entre la experiencia de los miembros de la ADM-19, incluyendo el antiguo M-19 y cuadros civiles del PCC-ML, y los representantes delegados de los grupos recientemente desmovilizados, como el PRT y el EPL. Mientras que los primeros no mencionan ningún problema en relación con su transformación de activistas de una organización clandestina en actores de la arena política legal, los últimos destacaron su necesidad de aprender primero el ABC de la política.

“Lo que pasa es que uno si llegó con una idea muy reformadora [a la ANC], de creer que, que lo que nosotros pensábamos iba a salir y uno se encontraba con un fenómeno y es que en la política juegan las alianzas. En la política juegan los compadrazgos, y ésta es una clase política, que tiene ciento cincuenta, doscientos años de experiencia, frente a unos muchachos que venían del campo soñadores, con muchas ideas muy poéticas, con una visión del poder totalmente diferente. Y eso sí, inicialmente lo golpeaba a uno. Pero después uno se daba cuenta que ese es el espacio en el que está, y buscaba las alianzas”. (Mejía, entrevista 2013).

Estas distintas experiencias pueden explicarse en parte por el hecho de que el M-19 se había desmovilizado casi un año antes que los otros grupos y ya había participado en elecciones nacionales y regionales al momento de entrar en la ANC, así como por el perfil individual de cada constituyente. Mientras que el ex comandante del M-19 Navarro había promovido desde finales del año 1989, posterior a una amnistía presidencial, el proyecto político de la naciente ADM-19 en círculos políticos alternativos al bipartidismo, Mejía, por ejemplo, había sido comandante militar de tiempo completo en el EPL antes de volverse delegado.

No obstante, a pesar de las dificultades iniciales, incluso delegatorios de grupos guerrilleros que se habían desmovilizado poco antes de la ANC, comparten con otros constituyentes más de 20 años después un sentimiento positivo de haber conseguido muchos puntos de sus respectivas agendas. Aunque todos los entrevistados reconocen que no alcanzaron todos sus objetivos, no perciben que hayan sacrificado algunas demandas por encima de otras. “Yo pienso que no se sacrificaron temas, los temas nosotros los discutimos y defendimos, lo que pensábamos, pero así como hubo cosas en las que nosotros ganamos espacio, hubo cosas en las que otros ganaron espacio” (Mejía, entrevista 2013). En este sentido, la simple oportunidad de levantarse y defender en la legalidad cuestiones que ellos identificaron como importantes retrospectivamente ya es reconocida como una victoria en sí misma.

Como resultado, la mayoría de las cuestiones de especial interés de los grupos desmovilizados se plasmaron en la nueva Constitución de 1991. En el caso del EPL, estos temas incluyeron principalmente una restricción constitucional del estado de sitio; el reconocimiento de la diversidad mediante la introducción de los derechos especiales de las minorías; una reforma del sistema de justicia a través de, por ejemplo, el nuevo mecanismo de la tutela para la protección del amplio catálogo de derechos fundamentales; y la apertura de nuevos espacios democráticos de participación política (Mejía, entrevista 2013). Según los entrevistados de los cuatro grupos, el único tema importante que no se alcanzó a tocar plenamente fue la reforma del ordenamiento territorial, a pesar de que muchos miembros de la ADM-19 y en particular el delegado del PRT José Matías Ortiz se pusieron de pie para este asunto (Flórez 2013; Ortiz 2014). Aunque la Constitución de 1991 hizo incorporar algunas medidas de descentralización, como dar más recursos a los departamentos y municipios y permitir la elección popular de gobernadores, también dejó la especificación legal en manos del Congreso, el cual llegó a

promulgar la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial sólo en 2011, después de que casi veinte propuestas legislativas habían sido rechazadas. Ortiz (entrevista 2014) comenta críticamente que “[los Miembros del Congreso] llegaron con una ley que no honraba los principios que establecimos en el proceso constitucional”.

No obstante, al evaluar los logros de los grupos guerrilleros desmovilizados en la ANC, desde su propio punto de vista, es esencial hacer hincapié en que los delegados de estas organizaciones apoyaron sobre todo una agenda reformista en lugar de un programa revolucionario. Esto quiere decir, que todos los ex guerrilleros participantes trataron principalmente las reformas políticas y dejaron de lado reformas al sistema económico en gran medida, un hecho que Villa (entrevista 2013) resalta cuando señala que “como no eran muchas las pretensiones pues tampoco fueron muchas las desilusiones”. De esta manera, las agendas se presentaron en línea con la tesis del Gobierno de que las transformaciones económicas y sociales quedarían para después, para el debate democrático (Flórez y Valenzuela 1996; Wills 1993, 171s).

En general, la bancada de la ADM-19 y su líder Navarro, en especial, evitaron tocar algunos temas sensibles, como por ejemplo la cuestión de una reforma de las Fuerzas Armadas, para no causar conflictos dentro de la ANC, pese a que sí ocurrió el debate al respecto. Dicha postura con frecuencia creó inconformidad en sectores de izquierda dentro y fuera de la ANC y la posición de la bancada fue calificada como conciliadora pero no satisfactoria (Villarraga y Plazas 1994, 454s; Ortiz, entrevista 2014).

A pesar de este balance, en gran medida, positivo, algunos de los protagonistas entrevistados admiten retrospectivamente dos “errores históricos” (Fajardo, entrevista 2013) de la ANC. Por un lado, los constituyentes subestimaron el impacto negativo tanto de los grupos narcotraficantes, como de los paramilitares, quienes en cierta forma se beneficiaron de las instituciones reformadas. Una muestra de ello es que la elección pública de los gobernadores y alcaldes no sólo amplió la democracia, sino que también abrió la puerta para una cooptación de las instituciones del Estado a nivel regional a través del fenómeno de la parapolítica (Fajardo, entrevista 2013). Por otra parte, el Pacto de la Casa de Nariño que inhabilitó a los constituyentes para la nueva elección del Congreso es percibido como medida que afectó negativamente la posterior implementación y el desarrollo legal de la nueva Constitución.²¹

Desde el punto de vista de muchos entrevistados, debido a estos errores la ANC no cumplió con su ambicioso intento de cambiar las reglas del juego político colombiano, al erradicar la corrupción y el clientelismo (Fajardo, entrevista 2013; Flórez, entrevista 2013; Mejía, entrevista 2013). Patiño (entrevista 2013) argumenta además que la ANC debía haber bloqueado las reformas constitucionales durante un período de tiempo específico después de la firma de la nueva carta política. De acuerdo con el ex comandante del M-19, tal disposición habría dado al acuerdo político, recién codificado, el tiempo necesario para consolidarse. Por otra parte, las fuerzas políticas emergentes no pudieron competir con éxito con los partidos tradicionales y establecer una verdadera tercera fuerza política alternativa al bipartidismo. Esa experiencia de fracaso se describe en la última sección, a modo de ejemplo, del proyecto político ADM-19.

5.2 Experiencia de los grupos ex guerrilleros después la ANC: el caso de la ADM-19

Desde su amnistía presidencial a finales de 1989, Pizarro y Navarro Wolff promovieron desde la legalidad un proceso que buscó la creación de un movimiento unificado de diversas fuerzas políticas ajeno al bipartidismo. Los primeros acercamientos con Colombia Unida, Socialismo Democrático y otros movimientos llevaron finalmente, en los últimos días de marzo de 1990, a la fundación de un “nuevo movimiento político

²¹ Si hay algo que puede ser percibido como una desventaja desde el punto de vista de los s entrevistados, es la decisión de incapacitar a los constituyentes para las próximas elecciones al Congreso (Patiño, entrevista 2013; Villa, entrevista 2013). Algunos destacan también que esta decisión particular descansaba principalmente en manos de Navarro (Patiño, entrevista 2013).

democrático [con el objetivo de] transformar la actual situación y donde, además, exista la convicción plena de que en la Colombia de hoy las vías civilista y los métodos de la democracia sean los únicos válidos para el ejercicio de la acción política” (El Tiempo 1990).²² Como reacción al asesinato de Pizarro pocos días después y expresión de solidaridad con el grupo desmovilizado por parte de los demás integrantes, la alianza cambió su denominación de AD en ADM-19 (Villarraga 2013, 46s).

En línea con la anterior postura del M-19, que, al seguir la receta de un sancocho nacional de su histórico líder Jaime Bateman, había insistido en amplios espacios de participación durante su negociación de paz, desde su creación, el naciente proyecto político encarnaba su principio fundamental: la inclusión. Ya en las elecciones del 11 de marzo de 1990, solo dos días después de la desmovilización del grupo insurgente, el grupo Acción Nacionalista por la Paz, liderado por el mismo M-19, había enviado al país un mensaje de reconciliación tras la inclusión del General retirado José Joaquín Matallana como cabeza de su lista para el Senado. Especialmente en la preparación de la ANC, la ADM-19 se adhirió a su declarado proyecto de formar un movimiento tan amplio como fuera posible para luchar contra el “reino de la exclusión” (Patiño, entrevista 2013) de los dos partidos políticos tradicionales. Al invitar a otros movimientos de izquierda,²³ incluidos los tres grupos guerrilleros que adelantaban negociaciones en ese momento con el Gobierno, el partido intentó enviar un mensaje de unidad de la izquierda colombiana tradicionalmente dividida (Toro, entrevista 2013). Por otra parte, la invitación a fracciones reformistas de los partidos tradicionales buscó, al mismo tiempo, romper con la marginalidad histórica de la izquierda y acercarse más a la ADM-19 al centro político. El proyecto aspiró a dejar atrás el prejuicio de ser un vehículo de la insurgencia y convertirse en el lugar de una alianza de los reformistas, dispuestos y capaces de resolver la crisis política. “El que buscaba el cambio tenía que evitar, precisamente, oler demasiado a guerrillero” (Patiño, entrevista 2013).

Ambas estrategias se reflejaron en la composición de la lista de la ADM-19 para las elecciones de la ANC en diciembre de 1990 y la bancada del partido en la misma. Además de ex comandantes del M-19, como Otty Patiño y Antonio Navarro Wolff, la lista también incluyó miembros del PCC-ML, como Germán Toro, integrantes del Partido Conservador y Liberal, e, incluso el entrenador apolítico pero muy popular de la selección nacional de fútbol Francisco Maturana. Con la decisión, internamente criticada, de incluir con Augusto Ramírez Cardona también un representante del paramilitarismo del Magdalena Medio, el mensaje de inclusión y reconciliación rompió claramente con el marco de la izquierda (Toro, entrevista 2013).

Al igual que anteriores divergencias respecto a la decisión de entablar conversaciones con el Gobierno, desacuerdos respecto a la relación pretendida entre el EPL desmovilizado y la ADM-19 caracterizaron el debate interno justo antes y después de la desmovilización del EPL. Si bien un consenso general compartió la percepción de importancia de un mensaje de unidad de la izquierda del M-19 y el movimiento Esperanza, Paz y Libertad, lanzado el 4 de abril 1991 en Medellín, inicialmente no pretendió un proyecto político propio y alternativo de la organización, la manera de vincularse al nuevo movimiento político se convirtió rápido en el centro del debate entre antiguos cuadros del EPL y PCC-ML.

Por lo menos en algunos sectores del EPL y el PCC-ML, unirse a un proyecto político bajo la bandera del más pequeño M-19²⁴ fue visto como la continuación del camino ya recorrido por el Frente Popular, que fue uno de los fundadores de la ADM-19 y sobre todo como el resultado de un cálculo político simple. Además de compartir la convicción de la importancia del símbolo de unidad con el ex M-19, ellos percibieron positivamente la imagen pública de dicho grupo y esperaron obtener una representación adicional en la ANC (además de los dos delegados del EPL acordados en el acuerdo de paz) mediante la inclusión de miembros del PCC-ML en la lista de la ADM-19 (Fajardo, entrevista 2013; Mejía, entrevista 2013; Toro, entrevista 2013).

²² Firmantes de la declaración fueron, la UP, el M-19, la Acción Nacionalista por la Paz, Colombia Unida, Socialismo Democrático, el Frente Democrático, el Frente Popular, los Inconformes de Nariño y el Frente Amplio de Magdalena Medio.

²³ Además de algunas facciones de la UP, otros movimientos de izquierda, como por ejemplo Colombia Unida, Frente Popular, Movimiento Inconformes, Partido Socialista Revolucionario y Socialismo Democrático unieron al ADM-19.

²⁴ Según Uribe (1994), el número de guerrilleros combatientes desmovilizados del M-19 y EPL ascendió, respectivamente, a 791 y 2.149.

Convencidos de que el fin justifica los medios, la etiqueta del M-19 no fue percibida como un problema, sino más bien como una fuerza motriz que animaba su entrada a la política nacional.

“Cuando lideramos el proceso de desmovilización, la decisión del partido que la democracia era lo fundamental no lo hicimos, pensando que nosotros éramos el ombligo del mundo ni que todos tenían que venir a sumarse a nosotros. Nosotros nos sumábamos o que construíamos una fuerza común entre todos los sectores progresistas y democráticos” (Toro, entrevista 2013).

Dentro de la fracción mayoritaria²⁵ que defendió la propuesta de vincularse con la ADM-19, aparecieron sin embargo dos posiciones divergentes. Mientras que una argumentó en pro de una disolución e integración inmediata, la otra optó por una transición larga en una tendencia organizada dentro de la alianza (Villarraga y Plazas 1994, 457ss). Esta última entendió la ADM-19 más como una coalición amplia de diversas fuerzas políticas y desconoció con ello, hasta cierto punto, la visión de la misma, la cual no se proyectó como “una federación de grupos, sino [como] un movimiento unificado” (El Tiempo 1990).

Después de que la IV Plenaria de la dirección nacional de Esperanza, Paz y Libertad había aprobado, el 14 de abril 1991, que el movimiento hiciera parte de la ADM-19, pero igualmente votado en contra de una disolución en la misma, la declaración de la VI reunión plenaria nacional pronunció finalmente, también tras la presión de Navarro,²⁶ la decisión de disolver el movimiento en la ADM-19. Empero, muchos de los antiguos cuadros de bajo rango del EPL vieron la decisión de sus comandantes con una mirada más crítica, por lo que rechazaron, especialmente, la aparición del ‘M-19’ en el nombre del proyecto político común y tuvieron miedo de una posible dominación interna sus antiguos líderes (Uribe 1994).

Por su parte, sobre todo la dirección del PRT percibió la adhesión del partido a la ADM-19 no sólo como subirse al carro ya arrancado con éxito del M-19, sino también como manera de continuar con su reivindicación tradicional de la unidad de las fuerzas alternativas. Así mismo, por sus vínculos cercanos con Colombia Unida, fundador de la alianza, el partido había acompañado la trayectoria del nuevo movimiento desde cerca. No obstante y como en el caso del EPL, tampoco hicieron falta sectores dentro del PRT que expresaran preocupaciones. Si bien éstos no se opusieron a la disolución del PRT en la ADM-19 per se, si resaltaron el peligro que la organización podía perder su identidad política y, por ente, sus vínculos con su base social (Rampf et al. 2014, 19s). Lo anterior se comprobó cuando algunos segmentos del antiguo M-19, en torno a Navarro y Vera Grabe, tomaron la decisión de disolver todas las estructuras y las fracciones de antiguos grupos guerrilleros dentro del movimiento con el fin de unificarlo, (Patiño, entrevista 2013) confirmaron, hasta cierto punto, la sospecha de que la percepción de supremacía de los miembros del M-19 podría resultar en una pérdida de la identidad propia en otros grupos. Varios entrevistados de otras guerrillas (como Flórez del PRT o Mejía del EPL) resaltan como error este cambio, como se argumentará más adelante. Con su estrategia amplia e incluyente, al permitir y buscar la participación de todos los movimientos de la izquierda, de políticos y progresistas interesados, incluso de las elites tradicionales,²⁷ y al beneficiarse del aire incrustado por los procesos de paz²⁸ y el apoyo electoral de muchos colombianos frustrados, el nuevo partido comenzó su experiencia exitosa (al menos inicialmente) en la política colombiana. En 1990, se postuló para las elecciones presidenciales. Navarro Wolff, quien substituyó el carismático candidato presidencial Pizarro, terminó tercero (12.5%) y tomó el cargo de Ministro de Salud en el Gobierno Gaviria. Medio año después, la nueva fuerza

²⁵ Una facción minoritaria optó por mantener la independencia de Esperanza, Paz y Libertad.

²⁶ Según Villarraga y Plazas (1994, 462), Navarro había afirmado anteriormente en varias reuniones que “el problema de la Alianza son ustedes, pues no se disuelven y donde voy me los encuentro con banderas, camisetas y grupos de activistas propios del EPL. Como si la ADM-19 fuera un frente de izquierda, reclamando participaciones de grupo, sin entender que la gran mayoría de la gente quiere es al M-19”.

²⁷ Al igual que en las elecciones de la ANC, la lista del partido para el Congreso en 1991 también incluyó, además de veteranos del M-19 y antiguos miembros del EPL y PRT, varios políticos del Partido Liberal y Conservador, sindicalistas y empresarios (Dirección General Para La Reinserción 2000).

²⁸ Muchos colombianos asociaron positivamente el ADM-19 con los acuerdos de paz que acababan de ser firmados entre el Gobierno y el M-19, EPL, PRT y MAQL. Para muchos votantes del ADM-19, el partido representaba una elección a favor de una salida negociada del conflicto armado.

política ganó 26.7% del total de sufragios emitidos en las elecciones de la ANC y se convirtió en la segunda bancada más amplia después del Partido Liberal. La ADM-19 parecía tener excelentes perspectivas de consolidarse como alternativa política a largo plazo para el bipartidismo.

Sin embargo, después de considerables resultados en las elecciones de Congreso en 1991 en las cual el partido ganó 9 curules en el Senado y 13 para la Cámara de Representantes, en las siguientes elecciones al Congreso del año 1994 la ADM-19 sólo ganó un puesto en la Cámara y no logró obtener una sola curul en el Senado. El mismo año Navarro, claramente, perdió la carrera por la Presidencia mediante la recepción de menos del 4% de los votos (Dirección General para la reinserción 2000, 101). Una vez más, el bipartidismo logró conservar su hegemonía tradicional. Los dos partidos tradicionales ganaron, en las tres elecciones al Senado celebradas entre 1991 y 1998, un resultado electoral estable con alrededor del 80% de los curules. El resto se distribuyó entre un máximo de 13 movimientos y partidos alternativos diferentes (Pizarro 2002). La idea de una oposición unida ajena al bipartidismo y el establecimiento de una fuerza política alternativa coherente parecían ser más que nunca un sueño utópico.

Al analizar las causas de este descenso electoral inesperado de la ADM-19, Toro (entrevista 2013) llega, retrospectivamente, a la dura conclusión de que: “aquí no ha prosperado [...] un mayor pluralismo político por la incapacidad de sectores que debíamos haber sacado ventaja de todo el proceso constituyente” y explica, en línea con estudios de corte académico sobre el caso de la ADM-19,²⁹ el fracaso traumático del proyecto político incluyente, no sólo con factores externos, sino explícitamente también con errores internos.

En este sentido, y respecto a los factores externos, vale la pena resaltar primero que la nueva Constitución de 1991 y otras reformas cambiaron el sistema electoral hasta cierto punto en favor de fuerzas políticas menores o nacientes, a pesar de que puntos importantes del acuerdo de paz con el M-19 que hubieran asegurado una favorabilidad electoral para el grupo desmovilizado, se habían hundido en el Congreso. A parte de acabar con el sistema tradicional de tarjetones repartidos por cada partido, estas reformas crearon por ejemplo, un solo distrito electoral para las elecciones al Senado, lo que junto con el sistema electoral proporcional tienden a favorecer, o al menos no desfavorecer, fuerzas políticas pequeñas sin bases locales fuertes (Moreno 2005; Pizarro 2002).

Adicional a estos factores externos de corte más institucional se sumaron al menos a inicios de los años 1990 otros que crearon, según Zuluaga (1999, 59s), una base propicia para el nuevo movimiento ajeno a la elite política tradicional. Mientras que las instituciones y partidos confrontaron una profunda crisis de legitimidad, la ADM-19 entró como actor nuevo e independiente a una arena política caracterizada justamente por la ausencia de una fuerza política alternativa.

Sin embargo, a pesar de esta posición inicial favorable, el entorno político de los inicios de los años 90 se volvió gradualmente desfavorable para el nuevo partido político. Por un lado, la elite política tradicional y el bipartidismo mostraron una impresionante habilidad de adaptarse a las nuevas reglas del juego y de recuperar su hegemonía política, después de que la elección para la ANC había creado en muchos colombianos la impresión precipitada de un cambio de las relaciones de fuerzas (Pizarro 2002). Tal restauración del predominio de los partidos tradicionales hizo evidente que la nueva Constitución no había logrado cambiar las matrices excluyentes de la cultura política. En tal contexto, la ADM-19 siguió en una competencia desigual, al tener que confrontar a un adversario respaldado por su *maquinaria* electoral, el clientelismo y superiores fondos para la campaña electoral.

Por otro lado, las primeras elecciones posteriores a la ANC se encontraron empañadas por una difícil coyuntura caracterizada por la agudización de la violencia (del narcoterrorismo y el incrementado conflicto armado) y un colapso parcial del Estado. Tal situación afectó el nuevo movimiento democrático primordialmente en dos sentidos. Mientras que el cambio de la coyuntura, de una euforia aspirando a la paz y a la reforma constitucional, nutrida por la ANC y los procesos de desmovilización, en una sensación de

²⁹ Ver sobre todo Boudon (2001), Villarraga (2013), Zuluaga (1999).

desilusión, causada por la continuidad del conflicto armado y primeros impactos sociales de la política neoliberal del Gobierno Gaviria, disminuyó el respaldo público para la ADM-19 que para muchos, más que cualquier otra fuerza, había encarnado este deseo de cambio, la incrementada violencia política afectó líderes políticos y sociales en general y los grupos desmovilizados en especial (Zuluaga 1999). Al respecto, Fajardo (entrevista 2013) subraya, por ejemplo, que: “Todos tuvimos amenazas permanentes [...] bueno este es el costo de venir a hacer la paz”.

La dimensión del factor externo de ausencia de garantías de seguridad para actores en transición a la política legal, la resalta Flórez (entrevista 2013), al referirse al caso del PRT:

“[En] este proceso tan traumático de reinserción, fueron muy pocos los que en este ambiente tan riesgoso optaron por lanzarse [a la política]. Por ejemplo ahí [...] en Bolívar tuvimos un caso, en San Jacinto, donde lanzamos una lista al consejo y eran ocho personas y mataron siete. Solo quedó uno vivo. El alcalde de Chalan lo mataron. Otro compañero que tuvimos como candidato al consejo de Sincelejo lo mataron. En San Marcos nos mataron otros dos. Entonces eso produjo un rechazo. [...] Las familias empezaron a decirle a la gente que no se metiera en política, por un criterio de supervivencia, de supervivencia personal”.

Como reacción a las permanentes amenazas de muerte y una ola de asesinatos, muchos desmovilizados salieron de la política, o incluso del país, como en el caso de Bernardo Gutiérrez, ex comandante del EPL y elegido senador de la ADM-19.

Respecto a los factores internos, que según algunos protagonistas de la ADM-19 jugaron un rol aún más importante que los factores externos en el declive gradual del partido después de la ANC (Flórez entrevista 2013; Toro, entrevista 2013; Villa, entrevista 2013), los entrevistados resaltan una serie de errores, remontados tanto al enfoque incluyente y reconciliador de la alianza, como a su afán de conseguir a corto plazo resultados positivos en las elecciones, basado en lo que Zuluaga (1999, 41) identifica como “la creencia de estar en el umbral del poder”,³⁰ que todos apuntaron, de alguna manera, como la causa de la disolución del contorno del perfil político de la ADM-19. Si bien la fundación del partido se había basado sobre un acuerdo que definió la paz, la reconciliación y la democracia como ejes centrales de la plataforma política inicial, posteriormente, dichos conceptos nunca fueron concretados en un programa político preciso (Villarraga, entrevista 2013; Zuluaga 1999, 36ss).

Por un lado, la elaboración de esta plataforma política sólida fue obstaculizada por la agenda electoral apretada, la cual dictó el ritmo del partido después de la ANC. En un plazo de sólo cuatro años, la ADM-19 se lanzó en siete elecciones³¹ y entró básicamente en una campaña electoral permanente. Sobre todo después de que la ANC había tomado la decisión de inhabilitar a los constituyentes para las elecciones a reconvocatoria del Congreso en octubre 1991, el partido sólo tuvo tres meses para organizar su campaña electoral y reemplazar sus cabezas carismáticas y populares en sus listas para las dos cámaras. En esta dinámica inquieta, la tarea de definir las líneas programáticas con frecuencia pasó al segundo plano. Mientras que Boudon (2001, 77) atribuye esta situación principalmente al carácter pragmático general de Navarro, Villarraga (entrevista 2013) y Flórez y Valenzuela (1996) van aún más lejos y argumentan que muchos de los antiguos miembros del M-19 simplemente subestimaron la importancia de una base programática bien elaborada. Justamente debido a esta postura, muchas conferencias programadas con el propósito de superar la elasticidad ideológica del movimiento fueron aplazadas por compromisos de campañas electorales supuestamente más urgentes (Villarraga entrevista 2013; Zuluaga 1999, 50).

Igualmente, la prisa de obtener éxitos a corto plazo desvió la atención de la importancia de construir una estructura interna eficiente que permitiera mantener, por un lado, sus miembros en línea y, por el otro lado, la

³⁰ Según Zuluaga (1999, 40ss) esta convicción de estar a punto de tomarse el poder constituye una herencia directa del M-19 e incidió en la “conducción política [de la ADM-19] y determinó en muchos aspectos su comportamiento ambiguo entre la oposición al Gobierno y colaboración”.

³¹ Elecciones presidencial de 1990 y 1994, elección de la ANC 1990, elecciones al Congreso 1991 y 1994 y elecciones regionales en 1992 y 1994.

influencia de los procesos de decisión internos de manera democrática de abajo hacia arriba. Esta omisión se volvió espinosa sobre todo ante la ola de oportunistas que, atraídos por los éxitos electorales del inicio, entraron al partido en los primeros años de su existencia.

Mientras que la opinión pública en general esperaba que el resultado electoral del partido fuera elevado, especialmente debido al resultado abrumador de las elecciones para la ANC, la alianza tenía poco tiempo y ningún mecanismo adecuado para filtrar los candidatos en función de su compromiso real con el ambicioso proyecto político antes de añadirlos a la lista del partido.³² En este momento muchas personas entraron al mismo, principalmente en búsqueda de una carrera política y con un interés limitado en contribuir al desarrollo del proyecto político como tal (Patiño, entrevista 2013).

“Eso era una locura, mejor dicho la sede, la ADM... eso llegaba gente y gente, gente, porque pensaban que íbamos a tomarnos el cielo con las manos y que eso la gente iba a votar así casi sin haber campaña. Entonces había gente que estaba segura que íbamos a sacar 30, 40 congresistas y estaban felices de que hayan puesto 25, puesto treinta, eso casi no les importaba, digamos después del puesto 30 para abajo todo el mundo estaba feliz”. (Patiño, entrevista 2013).

En noviembre de 1991, Navarro lanzó finalmente el primer intento real de construir una estructura de organización interna mediante la creación de una dirección nacional y un comité ejecutivo, aunque sin mucho éxito (Boudon 2001, 80). En los siguientes meses la nueva estructura no logró la unificación de los diversos grupos regionales e ideológicos, ni tampoco sentó las bases para una comunicación fluida entre el partido y su bancada en el Congreso, lo cual habría asegurado una actuación más coherente (Flórez, entrevista 2013; Patiño, entrevista 2013; Villa, entrevista 2013). Mientras que en la ANC la disciplina de grupo dentro de la bancada había presentado cierta novedad en el manejo de la política del país, tal dinámica se perdió en el Congreso después de las elecciones de 1991 totalmente. Excepto algunos asuntos puntuales, los diputados del partido no lograron coordinar sus acciones ni forzar proyectos realmente significativos en nombre de la ADM-19 (Zuluaga 1999, 51s).

Al reflexionar sobre las razones de los desastrosos resultados de las elecciones al Congreso en 1994, el propio Navarro explicó el declive del ADM-19 justamente con esta pérdida del espíritu colectivo dentro del partido. En una entrevista, luego de las elecciones, subrayó problemas serios de liderazgo que de alguna manera llevaron a una pérdida de control de la dirección nacional sobre la bancada del partido en el Congreso. El partido fue incapaz de asegurar una acción colectiva coherente y por lo tanto perdió gradualmente su imagen pública de unidad (Pizarro 1994).

“Lo que sucedió fue la disolución del espíritu colectivo [y más tarde de] la organización, [como consecuencia de] los resultados de 1994, [...] Nuestra gente comenzó a replicar el método que cada uno de ellos mismos eran la cabeza de una parte del movimiento y perdimos la capacidad de actuar de manera colectiva”. (Navarro 1994).

Más allá de no ser coherente y no crear una imagen de unidad ni de línea de acción clara, las acciones del partido tampoco lograron canalizar los intereses y preocupaciones de los diversos integrantes de la alianza y sus respectivas bases en un catálogo programático con propuestas concretas. En las palabras de Zuluaga (1999, 52), “se aumentó la distancia con los sectores populares [hasta tal punto que] la ADM-19 pareció olvidar la existencia de los pobres y de los excluidos a cuyo favor había empuñado las armas el M-19 veinticinco años atrás”. Al tratar de explicar esta falencia, algunos entrevistados destacan críticamente la falta de una estructura organizativa efectiva y particularmente la carencia de espacios democráticos para la retroalimentación desde abajo de decisiones tomadas por la dirección o la bancada. Según Flórez y Ortiz (entrevistas 2014), al interior

³² En esta agitada y difícil situación, Navarro, como un líder pragmático, supervisó la selección de nuevos miembros y la composición de la lista de candidatos.

de la ADM-19 prevaleció en este entonces una estructura estrictamente vertical concentrada en su líder Navarro cuya hegemonía se volvió gradualmente en una forma de autoritarismo. Aunque la alianza desde el inicio fue incluyente respecto a la selección de sus integrantes, el movimiento se mantuvo así, durante toda su existencia, excluyente en relación con la posibilidad de influenciar la toma de decisiones y de definir la línea política.

Más allá de la carencia de un perfil propio y propuestas concretas frente a problemas vigentes que hubieran permitido una delimitación positiva, el partido perdió, además, la posibilidad de perfilarse de manera negativa frente a los partidos tradicionales por su participación en el Gobierno;³³ la inclusión de políticos de los partidos tradicionales en sus listas y varias coaliciones electorales. Mientras que la participación del partido en el gabinete de Gaviria impidió, de cierta forma, recurrir al rol de una oposición crítica del Gobierno y se convirtió en una desventaja sobre todo cuando el presidente forzó la aplicación de impopulares reformas neoliberales, propuso una reforma fiscal, y apuntó cada vez más hacia una solución militar al conflicto armado con los dos grupos guerrilleros restantes, FARC y el ELN, una línea política que ni la ADM-19 ni su electorado aprobaron, los últimos dos puntos complicaron la disociación del movimiento con la elite política tradicional en general.³⁴ Igualmente, aunque al inicio Navarro había logrado diferenciarse del manejo administrativo tradicional y proyectar una imagen de lucha contra la corrupción, esta nueva ética se vino perdiendo gradualmente hasta el punto de que el Ministerio para los líderes del partido también se volvió un simple fortín burocrático (Flórez y Valenzuela 1996).

Al seguir el espíritu de consenso de la ANC y con el fin de asegurar resultados electorales positivos y alcanzar cargos políticos a corto plazo, el partido y su líder Navarro, quien aspiró personalmente a la presidencia en 1994, forzaron coaliciones políticas que se volvieron un estorbo para su perfil de fuerza alternativa. En particular, durante las elecciones regionales de alcaldes, consejeros y gobernadores en 1992, la ADM-19 estableció una serie de pactos con barones regionales del bipartidismo y grupos económicos que desdibujaron aún más los límites entre el partido y las elites tradicionales. Un ejemplo fue la alianza electoral con Carlos Albornoz, candidato del partido Conservador en Nariño, con el objetivo de ganar apoyo político para el candidato propio, Raúl Delgado. Gabriel Barrios (entrevista 2014), desmovilizado del PRT y ex concejal de San Juan de Nepomuceno (Bolívar), recuerda, para el caso de su municipio, incluso acercamientos entre la dirección de la ADM-19 y reconocidos promotores regionales del paramilitarismo con el fin de conseguir apoyo para el candidato del partido al consejo municipal. Dos años más tarde, el propio Navarro describió algunas de estas coaliciones como graves errores tácticos. De acuerdo con él, sobre todo la proximidad a Pedro Bonett, miembro del grupo económico Santo Domingo, había creado la impresión de que la ADM-19 había sido “entregada a las fuerzas tradicionales de la economía del país” (Navarro 1994 60).

En el cambiante contexto colombiano de la década de 1990,³⁵ y sobre todo después de las elecciones de 1991, la ADM-19 finalmente pagó el precio de sus errores estratégicos. Sin ninguna base social, cultural, religiosa o étnica, con una muy vaga plataforma ideológica, y sin un programa político más allá de los simples principios de la inclusión, democracia y paz, el partido dependió principalmente de votantes indecisos que fueron atraídos por el carisma de candidatos individuales³⁶ o cuestiones coyunturales³⁷ (García 1994). Después de conducir, en una ola de expectativas eufóricas, a una salida negociada del conflicto y una solución a la crisis política, y estrechamente vinculada a la popularidad de su líder Navarro, la ADM-19 se vio ante la falta de un

³³ Por el lado positivo, la participación en el Gobierno brindó a la nueva fuerza política la oportunidad de mostrarse capaz de gobernar y eliminar prejuicios de que movimientos políticos provenientes representarían un peligro para la democracia (Flórez y Valenzuela 1996; Zuluaga 1999, 41s).

³⁴ Después de haber cambiado dos veces la persona en el cargo, la ADM-19 se retiró en 1992 finalmente de la cartera a manera de protesta frente a la guerra integral, declarada por el Gobierno.

³⁵ Especialmente el ambiente eufórico de optimismo de principios de 1990, que fue particularmente basado en las expectativas de que la ANC y los acuerdos de paz alcanzados podrían dar lugar a un verdadero cambio político y la paz estable, fue roto por las negociaciones de paz fallidas con los grupos guerrilleros restantes, un número creciente de víctimas, debido principalmente a los grupos paramilitares, y la constatación de que una nueva Constitución no transforma automáticamente la cultura política.

³⁶ Otty Patiño como una cuestión de hecho, se refiere al ADM-19 en algunas ocasiones como “navarrismo” (Patiño, entrevista 2013).

³⁷ Basada en la experiencia reciente, de resultados positivos de las negociaciones de paz con el M-19, EPL, PRT MAQL, durante las elecciones de 1991, estas cuestiones individuales consistieron principalmente en la esperanza de un final negociado del conflicto armado.

apoyo social leal una vez el conflicto armado se intensificó y se destacó la falla de la nueva Constitución como un pacto de paz. A partir de entonces, se disminuyó la presencia de Navarro en los medios de comunicación significativamente.³⁸

Al reflexionar sobre esta difícil situación, algunos antiguos miembros del EPL y PRT consideran, retrospectivamente, como un error clave la decisión de disolver las estructuras y de romper con las identidades políticas de los diversos integrantes de la alianza. Por ejemplo, desde el punto de vista de Mejía (entrevista 2013) mediante la destrucción de la identidad común del EPL, el ADM-19 había “destruido algo que a futuro podía ser un nuevo movimiento” y rompió finalmente el enlace con las bases sociales que algunos de sus integrantes habían estado construyendo y atendiendo en algunos casos durante más de 20 años. Dado el dominio de un enfoque nacional, promovido por Navarro, que tendió a desatender características regionales, el partido desaprovecho claramente el capital político acumulado por algunos de sus integrantes en las regiones. La mejor muestra de esto fue la práctica de la dirección nacional de imponer candidatos, poco conocidos en la región de los Montes de María, a antiguos líderes locales del PRT, los cuales por su parte contaron con un buen reconocimiento en sus municipios (Rampf et al. 2014, 19s).

Adicionalmente, y también debido a la falta de una fuerte organización interna, la dirección del partido no pudo evitar del distanciamiento de los grupos heterogéneos dentro del ADM-19 después de 1991 (Patiño, entrevista 2013). Si bien la comunicación y la coordinación eran escasas, muchos de sus líderes regionales fueron tomando poco a poco una vida por su cuenta bajo la bandera del ADM-19.³⁹ Especialmente la decisión del partido de abandonar la práctica de presentar las listas de candidatos unificados en 1992 fortaleció aún más las deserciones y divisiones internas (Boudon 2001). Flórez (entrevista 2013) recuerda que “cada sector de la Alianza que tenía mayor peso en una región generaba su propio liderazgo, hacia sus propias listas y entraba en choque con los demás”. Toro (entrevista 2013) incluso señala críticamente que, al no crear una verdadera cultura de disciplina, la ADM-19 copió la misma cultura política que había criticado anteriormente y destaca así la tendencia del partido hacia el establecimiento de sus propios barones políticos, microempresas electorales y redes clientelistas.

Incapaz de asegurar la cohesión interna, y de evitar que en algunos casos fracciones regionales salieran de la ADM-19, el partido tuvo que aceptar que el proyecto de unificación de los sectores políticos alternativos de la política colombiana y su enfoque incluyente había fracasado.

Una vez en competencia abierta con el Partido Liberal y el Conservador y con sus *maquinarias*, la ADM-19 tuvo que lidiar con sus recursos financieros y logísticos limitados. En especial, luego de que el soporte inicial del Estado que fue parte de cada acuerdo de paz,⁴⁰ fuera gastado, la base financiera de las campañas electorales fue más que apretada, como algunos ex candidatos partido lo recuerdan (Flórez, entrevista 2013; Toro, entrevista 2013; Villa, entrevista 2013). El acuerdo único de una circunscripción electoral especial para la paz en las elecciones locales de 1994, en el que sólo los insurgentes desmovilizados podrían ser elegidos, no fue suficiente para contrarrestar esta desventaja.

³⁸ Mientras Patiño señala críticamente una campaña sistemática pública emprendida por las élites tradicionales con el objetivo de difamar el prestigio de Navarro después de la ANC (Patiño, entrevista 2013), Villa también menciona el cada vez más difícil acceso a los medios de comunicación en el contexto cambiante. Según él, los diferentes procesos de paz que inicialmente aseguraron presencia en los medios de comunicación, luego, cuando la atención se centró en otros temas, fue erróneamente dado por sentado (Villa, entrevista 2013).

³⁹ Teniendo en cuenta esta tendencia Navarro criticó en 1994 el hecho de que importantes victorias electorales locales no habían sido transformadas en bastiones políticos del partido. Refiriéndose a Barranquilla la ciudad más grande de Colombia en la costa del Caribe, expresó: “la alcaldía sirvió para dar crédito a un alcalde y su Gobierno pero nunca había sido parte de un proyecto político coordinado” (Navarro 1994).

⁴⁰ Según Villa (entrevista 2013) el ADM-19 gastó la mayor parte del apoyo financiero en la campaña electoral para la ANC y el Congreso en 1990 y 1991.

6 Conclusión

Al comparar las expectativas políticas de antiguos grupos guerrilleros, su participación en la ANC y su éxito limitado en la política posterior, uno sólo puede preguntarse por qué estos grupos nunca cuestionaron su decisión de poner fin a la lucha armada y entrar en la política. Si la Constitución incluyente de 1991 nunca fue realmente capaz de cambiar la cultura política excluyente del país, y si la oposición armada desmovilizada fracasó en gran parte al adoptar una postura colectiva legal de oposición política, ¿por qué nunca hubo una recaída en la lucha armada por parte de estos grupos?

El caso de la ADM-19 ofrece algunas lecciones aprendidas para hacer frente a esas cuestiones: en primer lugar, para la mayor parte de los ex insurgentes entrevistados, el sólo hecho de haber sido incluido en la ANC es suficiente para mirar hacia atrás con sentimientos positivos y para identificarse con la Constitución de 1991 como su constitución. Aunque muchos de los entrevistados ofrecen una evaluación más bien negativa de la aplicación de la nueva Constitución y hacen hincapié en el hecho de que nunca ha sido capaz de dar lugar a un verdadero cambio en la cultura política colombiana, esta identificación también significó que el retorno a la lucha armada nunca llegó a estar en consideración. Muchos de ellos más bien expresan sentimientos de algún tipo de responsabilidad respecto a la protección de la nueva carta política.

No obstante, es importante tener en cuenta que dentro de los antiguos grupos armados, la decisión clave de dejar las armas se hizo debido a la convicción compartida de que la lucha armada no condujo a ninguna parte. El hecho de alcanzar o no el éxito en la política, por tanto, no era suficiente para que se replantearan su estrategia elegida. Por otra parte, desde el punto de vista de todos los entrevistados, tanto los efectos limitados de la nueva Constitución, como el fracaso de la ADM-19, se explican no sólo por factores externos relacionados con la cultura política excluyente, sino también por incompetencia interna de los mismos grupos desmovilizados, de sus delegados en la ANC y del partido político ADM-19. Esta interpretación implica algunas lecciones aprendidas puntuales, tales como la importancia de un período garantizado legal durante el cual deberían prohibirse contra-reformas para que la constitución concedería tiempo para desarrollar los acuerdos, o la conclusión de que el exceso de inclusión puede convertirse en un impedimento para el diseño y establecimiento de la base programática de un nuevo partido.

Veinte años después de la traumática derrota electoral del ADM-19 de 1994 muchos protagonistas aceptan estas lecciones aprendidas y por lo tanto concentran su atención en el actual proceso de paz entre las FARC y el Gobierno Nacional. Los mismos debates que tuvieron lugar hace 18 años parecen ser relevantes una vez más. ¿Qué lecciones puede aprender las FARC de los procesos de la década de 1990?

Aunque el contexto actual es ciertamente diferente, por lo menos las circunstancias externas no parecen estar a favor de un nuevo movimiento político alternativo, más de lo que lo estuvieron en la década de 1990. Con esto en mente, queda por ver cómo las FARC se encargarán de su transición interna. Sin el ambicioso intento de unificar todo el espectro de la izquierda en Colombia, con una base programática clara y un enfoque mucho más local, por lo menos una cosa se puede decir ya: el proyecto de las FARC va en una dirección diferente que la de procesos precedentes.

Bibliografía

- Archila, Mauricio** 2008. El maoísmo en Colombia: La enfermedad juvenil del marxismo-leninismo, en: Revista Controversia, 190, 147-196.
- Boudon, Lawrence** 2001. Colombia's M-19 Democratic Alliance: A Case Study in New-Party Self-Destruction, en: Latin American Perspectives, 28, 1, 73-92.
- Buenahora Febres-Cordero, Jaime** 1995. La democracia en Colombia: Un proyecto en construcción. Bogotá: Contraloría General de la República.
- Carrigan, Ana** 2009. El Palacio de Justicia: Una tragedia colombiana. Bogotá: Icono Editorial.
- Corréa Peraza, Hernando** 2005. El Palacio de Justicia ¿Con las armas al poder? Antecedentes, la toma, los desaparecidos. Bogotá: Editorial Carrera 7ª.
- Delgado, Álvaro** 2008. Anotaciones a la política del partido comunista, en: Revista Controversia, 190, 55-96.
- Dirección General para la Reinserción** 2000. Huellas de paz: Los desmovilizados y su participación en los escenarios de elección popular. Balance 1990-2000. Bogotá: Ministerio del Interior.
- Echandía, Camilo** 2000. El conflicto armado colombiano en los años noventa: Cambios en las estrategias y efectos económicos, en: Revista Colombia Internacional, 49-50, 117-134.
- Fajardo, Darío y la Alimentación y la Agricultura** 2002. La tierra y el poder político: La reforma agraria y la reforma rural en Colombia, en: Revista Reforma Agraria Colonización y Cooperativas, 1, 4-20.
- Flórez, Enrique y Pedro Valenzuela** 1996. De la oposición armada al frustrado intento de alternativa democrática en Colombia, en: Revista Colombia Internacional, 36, 31-40.
- García Durán, Mauricio** 1992. De la Uribe a Tlaxcala. Procesos de paz. Bogotá: Cinep.
- García, Ricardo** 1994. Elecciones parlamentarias 1994: El mercado político y la lógica de clientela, en: Revista Foro, 23, 17-25.
- Grabe, Vera y Otty Patiño** 2014. Considerations regarding peace negotiations in Colombia: 1990-2014.
- Heywood, Andrew** 2003. Political ideologies: An introduction. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- López, Claudia** 2007. La ruta de la expansión paramilitar y la transformación política en Antioquia: La década de la transformación 1997-2007, en: Romero, Mauricio (ed.) Parapolítica: La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. Bogotá: Intermedio, 123-232.
- Mujica, María Eugenia y Francisco Thoumi** 1996. Las negociaciones de paz y la participación de las guerrillas colombianas en el narcotráfico, en: Revista Colombia Internacional, 36, 41-47.
- Navarro Wolff, Antonio** 1994. Entrevista a Antonio Navarro Wolff: ¿Qué paso con la AD M-19? “No supimos definir una personalidad política”, en: Revista Foro, 24, 57-62.
- Patiño, Otty, Vera Grabe y Mauricio García Durán** 2009. El camino del M-19 de la lucha armada a la democracia: Una búsqueda de cómo hacer política en sintonía con el país, en: García Durán, Mauricio (ed.) De la insurgencia a la democracia: Estudios de caso. Bogotá: CINEP, 43-106.
- Peñaranda Supelano, Ricardo Daniel** 2010. El Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL): Una guerra dentro de otra guerra. Bogotá: ARFO Editores.
- Pizarro Leongómez, Eduardo** 1996. Insurgencia sin revolución: La guerrilla en Colombia en una perspectiva comparada. Bogotá: Tercer Mundo Editores.
- Pizarro Leongómez, Eduardo** 2002. La atomización partidista en Colombia: El fenómeno de las micro-empresas electorales, consultado Diciembre 4, 2013, en: www.kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/292.pdf

- Rampf, David, David Castillo y Marcela Llano** 2014. La historia no contada del Partido Revolucionario de los Trabajadores: Un análisis de la transición del PRT de un partido clandestino a un actor de la política legal. Inclusive Political Settlements, Artículo 4. Berlín: Berghof Foundation.
- Rampf, David y Diana Chavarro** 2014. The Colombian National Constituent Assembly – Turning Exclusion into Inclusion or Vain endeavour? Inclusive Political Settlements, Artículo 1. Berlín: Berghof Foundation.
- Reyes Posada, Alejandro** 2009. Guerreros y campesinos, el despojo en la tierra en Colombia. Bogotá: Editorial Norma.
- Santos Pérez, Antonia y Juan Ibeas Miguel** 1995. Elecciones y Reforma Política en Colombia, en: Revista de Derecho Político, 40, 341-378.
- Tattay, Libia** 2005. Volviendo armados: Quintín Lame, relato de un proceso de paz. Trabajo de grado, Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Humanas. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- UNDP** 2006. Evaluación del conflicto armado en cifras, en: Revista Hechos del Callejón, 2, 16, 2-5.
- Uribe, María Victoria** 1994. Ni canto de gloria ni canto fúnebre: El regreso del EPL a la vida civil. Colección papeles de paz. Bogotá: CINEP.
- Villamizar, Darío** 1995. Aquel 19 será: Una historia del M-19, de sus hombres y sus gestas. Un relato entre la guerra, la negociación y la paz. Bogotá: Planeta.
- Villarraga Sarmiento, Álvaro** 2013. Procesos de paz y tránsito de grupos alzados en armas a nuevos movimiento políticos, en: Revista Controversia, 200, 17-74.
- Villarraga Sarmiento, Álvaro** (no publicado). Ejército Popular de Liberación (EPL): Guerra irregular, pacto de paz y constituyente.
- Villarraga Sarmiento, Álvaro y Nelson Plazas** 1994. Para reconstruir los sueños: Una historia del EPL. Bogotá: Fondo Editorial para la Paz, Fundación Progresar.
- Wills, Maria Emma** 1993. Las políticas gubernamentales frente al proceso de paz: Entre el peso del pasado y un futuro incierto, en: Ungar Bleir, Elisabeth (ed.) Gobernabilidad en Colombia, retos y desafíos. Santa Fe de Bogotá: Universidad de los Andes, 129-186.
- Zuluaga Nieto, Jaime** 1999. De guerrillas a movimientos políticos: Análisis de la experiencia colombiana: El caso del M-19, en: Peñaranda, Ricardo/Guerrero, Javier (eds.) De las armas a la política. Bogotá: IEPRI – Tercer Mundo Editores, 1-74.

Fuentes primarias

- EPL** 1991. Acuerdo final entre el Gobierno Nacional y el Ejército Popular de Liberación. Bogotá, Febrero 26, 1991.
- Gutiérrez, Bernardo** 1991. Intervención del ex comandante Bernardo Gutiérrez, sesión plenaria de la ANC. Bogotá, Marzo 7, 1991.
- MAQL** 1990. Carta del MAQL a Monseñor Petro Rubiano, Presidente de la Conferencia Episcopal colombiana y de la comisión “Cauca por la paz”. Cauca, Octubre 14, 1990.
- MAQL** 1991. Acuerdo final entre el Gobierno Nacional y el Movimiento Armado Quintín Lame. Campamento de Pueblo Nuevo, Caldon. Cauca, Mayo 27, 1991 .
- Ortíz, José Matías** 1991. Intervención del constituyente por el PRT José Matías Ortíz Sarmiento ante la Asamblea Nacional Constituyente. Bogotá, Febrero 22, 1991.
- PRT** 1991. Acuerdo final entre el Gobierno Nacional y el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Don Gabriel, Ovejas. Sucre, Enero 25, 1991.

Entrevistas

- Barrios, Gabriel**, (Antiguo dirigente de la ANUC y del PRT en Montes de María, ex concejal de San Juan de Nepomuceno). Bogotá, Febrero 10, 2014.
- Fajardo, Jaime**, (Ex comandante del EPL, ex miembro del Comité Central del PCC-ML y constituyente). Medellín, Noviembre 14, 2013.
- Flórez, Enrique**, (Ex miembro y negociador del PRT, candidato al Senado por la ADM-19). Bogotá, Noviembre 12, 2013; Agosto 1, 2014.
- Mejía, Darío**, (Ex comandante del EPL, constituyente). Bogotá, Noviembre 13, 2013.
- Ortiz, José Matías**, (Ex comandante del PRT, constituyente y Senador). Barranquilla, Febrero 21, 2014.
- Patiño, Otty**, (Ex comandante del M-19, constituyente de la ADM-19). Bogotá, Septiembre 30, 2013, Octubre 8, 2013.
- Restrepo Herrera, José Francisco**, (Ex miembro del PRT). Sincelejo, Febrero 21, 2014.
- Toro, Germán**, (Ex sindicalista, miembro del Comité Central del PCC-ML, constituyente de la ADM-19 y candidato al Senado por la ADM-19). Pereira, Octubre 3, 2013.
- Villa, Fabio**, (Ex miembro del PCC-ML, líder estudiantil, constituyente y candidato al Senado por la ADM-19). Bogotá, Octubre 18, 2013.
- Villarraga, Álvaro**, (Ex miembro del Comité Central del PCC-ML y ex miembro del Congreso). Bogotá, Diciembre 10, 2013.